

EXPERIENCIAS DE PAZ Y TRANSICIÓN

Lecciones aprendidas
para el posacuerdo en **Colombia**

EDITOR ACADÉMICO
MIGUEL BARRETO HENRIQUES

ACUERDO FINAL PARA LA
TERMINACIÓN DEL CONFLICTO
Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA
PAZ ESTABLE Y DURADERA

[Handwritten signatures]



EXPERIENCIAS DE PAZ Y TRANSICIÓN

Experiencias de paz y transición

Lecciones aprendidas para el posacuerdo en Colombia

Editor Académico
Miguel Barreto Henriques

José David Moreno
Angélica Alba-Cuéllar
Miguel Barreto Henriques
Pablo Leonardo Uncos
Beatriz Eugenia Suárez López
Bibiana Marcela Rueda Rodríguez

Experiencias de paz y transición : lecciones aprendidas para el posacuerdo en Colombia / Editor académico Miguel Barreto Henriques ; José David Moreno [y otros cinco] ; prólogo Borja Paladini Adell. – Bogotá : Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, 2020.

234 páginas : ilustraciones, gráficas, tablas, mapas ; 17 x 24 cm.

ISBN 978-958-725-289-7

1. Paz. 2. Construcción de la paz. 3. Acuerdos de paz. 4. Reconciliación. 5. Desmovilización. 6. Proceso de paz . 7. Comisión de verdad. 8. Conflicto armado. 9. Justicia transicional. 10. Víctimas de la violencia. 11. Postconflicto armado. 12. Mediación internacional. I. Moreno, José David, autor. II. Alba Cuellar, Angélica, autora. III. Barreto Henriques, Miguel, autor y editor. IV. Uncos, Pablo Leonardo, autor. V. Suárez López, Beatriz Eugenia, autora. VI. Rueda Rodríguez, Bibiana Marcela, autora. VII. Adell, Borja Paladini, prologuista. VIII. Tit. CDD 303.69

Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano

Observatorio de Construcción de Paz

Carrera 4 N° 22-61 - PBX 2427030 - www.utadeo.edu.co

Primera edición 2020

© Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano

ISBN impreso: 978-958-725-289-7

ISBN epub: 978-958-725-288-0

ISBN digital: 978-958-725-287-3

Carlos Sánchez Gaitán

RECTOR

Andrés Franco Herrera

VICERECTOR ACADEMICO

Liliana Álvarez Revelo

VICERECTORA ADMINISTRATIVA

Alejandro Molano Vega

DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

Miguel Barreto Henriques

DIRECTOR OBSERVATORIO DE CONSTRUCCIÓN DE PAZ

EQUIPO EDITORIAL

Marco Giraldo Barreto

JEFE DE PUBLICACIONES

Luis Carlos Celis Calderón

COORDINACIÓN GRÁFICA Y DISEÑO

Mary Lidia Molina Bernal

COORDINACIÓN EDITORIAL

Juan Carlos García

COORDINACIÓN REVISTAS

Sandra Guzmán

DISTRIBUCIÓN Y VENTAS

María Teresa Murcia

ASISTENTE ADMINISTRATIVA

EDICIÓN

Laura Mercedes Arjona

CORRECTORA DE ESTILO

Luis Carlos Celis Calderón

DISEÑO PORTADA, PAUTA GRÁFICA Y

RETOQUE FOTOGRÁFICO

Mary Lidia Molina Bernal

DIAGRAMACIÓN Y REVISIÓN EDITORIAL

Panamericana Formas e Impresos S.A.

IMPRESIÓN

El presente libro hace parte de la línea de investigación: Grupo CERCID (COL0041319), Línea de investigación: 1.- Conflictos internacionales, seguridad y construcción de paz. Impreso en Colombia - Printed in Colombia

© Prohibida la reproducción total o parcial por cualquier medio sin autorización de la universidad

Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano | Vigilada Mineducación.

Reconocimiento de personería jurídica: Resolución No. 2613 de 14 de agosto de 1959, Minjusticia.

Acreditación institucional de alta calidad, 6 años: Resolución 4624 del 21 de marzo de 2018, Mineducación.

Experiencias de paz y transición

Lecciones aprendidas para el posacuerdo en Colombia

Tabla de contenido

Prólogo: Aprendiendo a gatear y a construir paz	
Borja Paladini Adell	9
Introducción	
Miguel Barreto Henriques	15
Experiencias internacionales de posacuerdo y transición	
Después de la guerra, la violencia: escenarios sociales en El Salvador luego de los Acuerdos de Paz de 1992	
José David Moreno	25
El rol de la ONU en los posacuerdos de El Salvador y Guatemala	
Angélica Alba-Cuéllar	61
Las Comisiones de la Verdad de Perú y Colombia: lecciones aprendidas, retos y obstáculos	
Miguel Barreto Henriques	91
Políticas estatales de medios vs. procesos de concentración mediática: el caso de la democratización argentina y sus enseñanzas para el posacuerdo colombiano	
Pablo Leonardo Uncos	129

Experiencias nacionales de posacuerdo

El modelo de justicia transicional colombiano: un mecanismo para la construcción de paz

Beatriz Eugenia Suárez López

165

Inseguridad, violencia y debilidad institucional: la influencia de las variables de seguridad en la reincidencia de desmovilizados en Colombia

Bibiana Marcela Rueda Rodríguez

201

Prólogo: Aprendiendo a gatear y a construir paz

Borja Paladini Adell¹

La paz como ideal político independiente del ideal de la guerra es un pensamiento reciente en el acervo intelectual humano: no más de 200 años (Howard, 2001). Immanuel Kant fue uno de los primeros filósofos que planteó que la paz tenía que definirse en sí misma y no solo como un periodo vacuo entre guerras. En el periodo de la Ilustración, la guerra empezaba a considerarse como un mal tenebroso que debía poder evitarse a través de la capacidad racional humana para organizarse, cooperar con otros y acordar medidas para lograr la paz. En su libro de 1795, *La paz perpetua*, Kant estableció que los Estados podían organizarse a partir de acuerdos entre ellos y a través de la constitución de gobiernos responsables. Así, gobiernos de calidad y acuerdos entre Estados debían permitir la resolución pacífica de conflictos en el sistema político internacional.

1 Especialista en diálogo y construcción de paz, facilitación y diseño de procesos de paz, e implementación de acuerdos de paz con más de 20 años de experiencia. Durante 15 años ha apoyado los procesos de paz en Colombia tanto en el nivel local y comunitario como en espacios de alta política y mediación. Politólogo de la Universidad Autónoma de Barcelona. Candidato a doctor en Estudios de Desarrollo por el Instituto Hegoa, de la Universidad del País Vasco. Ha trabajado, asesorado y/o colaborado con instituciones especializadas en investigación, desarrollo de políticas y/o prácticas de construcción de paz, alrededor del mundo, entre otras: Naciones Unidas, Universidad de Notre Dame / Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz, Instituto de Paz de los Estados Unidos (USIP), Berghof Center for Conflict Transformation, Peace Research Institute of Oslo (PRIO), Norwegian Center for Conflict Resolution (NOREF), Conciliation Resources, Escuela de Cultura de Paz de la Universidad Autónoma de Barcelona, Presidencia de Colombia, entre otros. Profesor / Lector invitado en la "Práctica de la construcción de paz" por diversas universidades (Universidad Nacional de Colombia, Pontificia Universidad Javeriana - Bogotá, Universidad de Cartagena, Universidad Ramon Llull - Blanquerna, entre otras). <<https://www.linkedin.com/in/borjapax>> ; <borjapax@gmail.com>

Por otro lado, la paz como algo que se puede construir es un concepto aún más reciente. En 1975, aparece en la literatura académica cuando el investigador noruego Johan Galtung publica su artículo “Tres aproximaciones para la paz: mantenimiento de la paz, negociación de la paz y construcción de paz” (Galtung, 1976). En ese texto, el autor plantea que la paz se puede promover y construir, y va más allá del cese de la violencia directa (paz negativa), la interposición de cascos azules (*peacekeeping*) o la solución negociada a conflictos armados (*peacemaking*). Para Galtung, la construcción de paz es un emprendimiento político que tiene como objetivo crear paz sostenible, enfrentando las causas estructurales o profundas de los conflictos violentos, a partir de las capacidades locales para la gestión pacífica de los mismos. El concepto de “construcción de paz” solo tiene 45 años de vida.

La idea es novedosa también en el marco normativo e institucional del sistema político mundial. Solo en 1992, el Secretario General de Naciones Unidas, Boutros Boutros-Ghali, presentó al Consejo de Seguridad “Una agenda para la paz” (ONU, 1992), documento con recomendaciones para fortalecer los instrumentos disponibles en la Organización en vistas a consolidar la paz, más allá de sus tradicionales *peacemaking* y *peacekeeping*. Buscaba así responder a los nuevos retos emergentes de la postguerra fría, entre ellos la proliferación de conflictos armados internos. Uno de los instrumentos más novedosos en la Agenda es la “construcción de paz postconflicto”, que se define como el conjunto de las acciones que se deben realizar tras la firma de los acuerdos de paz, con el fin de identificar y apoyar estructuras de soporte al fortalecimiento de la misma, para evitar recaer en los conflictos armados. Con la Agenda y a través de una serie de reformas institucionales posteriores, Naciones Unidas amplía el instrumental disponible para enfrentar los retos de los conflictos armados y consolidar la paz. Pero los cambios han sido lentos: solo en 2005, Naciones Unidas crea la Comisión de Construcción de Paz, y en el 2016, aprueba una resolución (ONU, 2016) sobre la necesidad política de que la construcción de paz no se interprete solo como algo que ocurre tras los conflictos armados, sino como una estrategia para de prevención de la violencia (antes de que se convierta en conflictos armados) y de consolidación de la paz tras la firma de acuerdos. Un abordaje más cercano a la propuesta de Galtung.

Todo esto ocurrió antes de ayer, por así decirlo. O sea que la paz como algo que tiene valor en sí mismo y que se puede construir, es una idea en su infancia. De hecho, la palabra *peacebuilding* no existe aún en los diccionarios y solo en los dos últimos años algunas organizaciones están solicitando que se incluya para darle el valor que se merece (International Alert, 2018).

Como se puede apreciar, estamos aún aprendiendo a valorar la paz y a desarrollar estrategias políticas, sociales, culturales, económicas, ambientales que hagan de ella algo sostenible, autorregenerativo, y de la guerra, algo improbable o, mejor aún, algo inadmisibles. Como un infante que está dando sus primeros pasos, el ser humano está explorando cómo se debe y puede construir paz. Como todo niño en su proceso de aprendizaje, lo hace desde la curiosidad, la prueba, el error, la práctica constante. Poco a poco, va ganando confianza. Pero aún hay un largo camino por recoger, como han explicado diversos críticos de la idea de construcción de paz, tanto académicos como practicantes, tanto del norte como del sur global (Pérez de Armiño & Zirion, 2019).

Desafortunadamente, para el ser humano construir paz no es algo que se aprende en pocos meses. Un pequeño aprende muchísimo más rápido a caminar que el ser humano a construir paz sostenible. Progresar del gateo tembloroso actual al arte de la construcción de paz es una tarea que involucrará a varias generaciones. Y no se pueden descartar retrocesos.

En este escenario, sin embargo, Colombia es uno de los niños más avanzados en esta aventura del aprendizaje y progreso humano. Su trágica vivencia de los últimos 60 años ha empujado a los hombres y mujeres del país a indagar sobre las posibilidades de la paz: su capacidad de incluir y de sanar, de acompañar a las víctimas que más sufrieron la guerra, de gobernarla y expandirla. El país lleva años gateando por los caminos de la construcción de paz e indagando cómo este proceso puede ayudarnos a ser mejores personas, comunidades, sociedades y un mejor Estado. Colombia está explorando más que nadie el poder transformador de la paz.

Hace unos años, el país parecía habitar en un callejón sin salida. Sin embargo, siempre hubo en el callejón grietas por donde se filtraban halos de luz, a menudo inapreciables. Luz que guiaba a tantos hombres y mujeres a resistir, a construir alternativas de paz en medio de la más extrema violencia. Luz que mantenía viva la esperanza. El proceso de paz en el 2012 amplió las grietas y la intensidad de la luz. El acuerdo de paz a finales del 2016 iluminó el callejón. El reto ahora es salir del callejón y dejarse llevar por el poder transformador de la construcción de paz.

En este ejercicio de aprendizaje, en mi opinión, Colombia puede inspirarse en dos fuentes de conocimiento acumulado. La primera: puede reflexionar y aprender de su propia historia reciente. A menudo se olvida, pero es uno de los países del mundo que está explorando prácticas de construcción de paz innovadoras, incluso en medio de la guerra. En los últimos 20 años, Colombia ha firmado más de 10 acuerdos de paz con actores ilegales, e reincorporado

a la legalidad a miles de combatientes. En medio de la guerra, el país aprobó una de las leyes de reparación de víctimas más ambiciosas del mundo, a pesar de todas las dificultades de su implementación. En los últimos 30 años, la ciudadanía colombiana ha protagonizado una de las movilizaciones sociales por la paz más robusta y sostenida en el mundo; en algunos territorios, las comunidades han explorado diversas vías valientes para resistir la guerra; en otras regiones, han declarado zonas de paz o refugios humanitarios; en otros más, se han creado alianzas y plataformas de paz donde diversas instituciones, de la mano de la movilización local, han impulsado agendas, redes y políticas para la construcción de paz, articulando actores locales, regionales, nacionales e internacionales, como son, por ejemplo, los Programas de Desarrollo y Paz.

Colombia es un laboratorio de innovación, por lo que el país debe mirarse a sí mismo para aprender y avanzar en la construcción de paz. Puede aprender de sus propias prácticas exploradas por su gente, sus líderes sociales, sus víctimas. Si el mundo mira al país como un espejo donde aprender sobre construcción de paz y donde lograr inspiración ¿por qué los y las colombianos no hacemos lo mismo?

Segunda fuente: Colombia también puede aprender de la experiencia comparada. De acuerdo con el programa “Political Settlements” de la Universidad de Edimburgo, entre 1990 y finales de 2019, se han firmado 1832 acuerdos de paz en el mundo, en el marco de más de 150 procesos de paz (Political Settlements Research Programme, 2020). La mayoría de ellos han sido en conflictos internos (dentro de un país), y tenían un carácter parcial, por ejemplo, un acuerdo de cese el fuego humanitario temporal o uno para liberar algunos prisioneros, es decir, no han puesto fin a la confrontación armada. Solo en pocos casos fueron de tipo comprensivo, o sea que se logró un acuerdo (o un conjunto de acuerdos) que atendió los principales temas que se dirimían en el conflicto armado y que fue capaz de ponerle fin a las hostilidades, al menos temporalmente. El Instituto Kroc afirma que solo se han firmado 34 Acuerdos Integrales de Paz en el mundo, entre 1989 y el 2012 (Instituto Kroc, 2020). El histórico acuerdo de paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP fue firmado el 24 de noviembre de 2016.

En esta lógica, el libro que usted tiene en sus manos y el volumen 1 de esta misma serie, se constituyen en un gran aporte del Observatorio de Construcción de Paz de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano. Sus autores presentan algunas enseñanzas para el posacuerdo en Colombia, e identifican pistas comparativas nacionales e internacionales en algunos temas de alta relevancia para la construcción de paz y la transición. Es un aporte comparativo que ayuda a

motivar la curiosidad innata de los seres humanos. Curiosidad que se exagera, por un lado, al aprender de otros y al compararnos con ellos. Y también, al mirarse y reflexionar críticamente la propia práctica y experiencia.

El libro presenta diversos artículos que permiten entender mejor temas como la gestión de la violencia post-acuerdos de paz, el rol de terceros actores como la ONU, el papel de diversos instrumentos de justicia como son las comisiones de verdad o los mecanismos de justicia para la transición. Desafortunadamente, no hay recetas ni varitas mágicas para la construcción de paz. Las transiciones se parecen más a una montaña rusa que a una autopista a la playa. Cada país debe encontrar su camino; aprender de sus errores; reconocer y construir sobre sus innovaciones y buenas prácticas.

La paz siempre será perfectible. Nunca estaremos plenamente satisfechos. Siempre habrá miles de retos políticos, económicos, sociales, culturales, espirituales, éticos y ambientales. No obstante, analizar y entender cómo Colombia y otros países han sido capaces de avanzar, es un factor de motivación, amplía la cantidad y la calidad de la luz en este arduo camino de la construcción de paz, para salir del callejón. Hagamos de nuestra práctica de la construcción de paz, nuestro gateo, aún tembloroso, como legado para nuestros hijos e hijas, para que ellos sigan puliendo la práctica y el arte de la construcción de paz. Disfruten la lectura.

Referencias

- Galtung, J. (1976). Three approaches to peace: Peacekeeping, peacemaking, and peacebuilding. En *Peace, war and defense: Essays in peace research* (Vol. 2, pp. 297-298). Copenhagen, DK: Christian Ejlertsen.
- Howard, M. (2001). *La invención de la paz: reflexiones sobre la guerra y el orden internacional*. Barcelona: Salvat.
- Instituto Kroc para Estudios Internacionales de Paz. (2020). *Peace Accords Matrix*. Notre Dame, IN: Autor. Recuperado de <https://peaceaccords.nd.edu/about-pam>
- International Alert. (4 de septiembre de 2018). *Lets get peacebuilding in the dictionary*. Londres: Autor. Recuperado de <https://www.international-alert.org/stories/lots-get-peacebuilding-in-the-dictionary>
- Naciones Unidas. (17 de junio de 1992). *Una agenda para la paz. Diplomacia preventiva, establecimiento de la paz y mantenimiento de la paz*. Informe

del Secretario General sobre la labor de la Organización presentado en la cumbre del Consejo de Seguridad. Asamblea General. A/47/277. S/24111. Recuperado de www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/47/277

Naciones Unidas. (27 de abril de 2016). *Examen de la estructura de las Naciones Unidas para la consolidación de la paz*. Resolución aprobada por la Asamblea General. 70/262. Recuperado de <https://undocs.org/es/A/RES/70/262>

Pérez de Armiño, K., & Zirion Landaluze, I. (Coords.). (2019). *Pax crítica: aportes teóricos a las perspectivas de paz posliberal*. Madrid: Tecnos.

Political Settlements Research Programme. (2020). *Peace Agreements Database*. Edinburgh, UK: University of Edinburgh. Recuperado de <https://www.peaceagreements.org/search>

Introducción

Miguel Barreto Henriques

El acuerdo de paz logrado con la guerrilla de las FARC, en el 2016, figura como uno de los momentos más significativos y trascendentales de la historia reciente de Colombia. No obstante, Colombia no es un país en paz. La “horrible noche” a la que aludió el presidente Juan Manuel Santos, en su discurso en Cartagena, no cesó mágicamente con la tinta de la firma del acuerdo, en La Habana. Colombia no vive una era de posguerra, ni de posconflicto, sino de posacuerdo.

Se prefiere el uso de la expresión ‘posacuerdo’ en detrimento de ‘posconflicto’ por dos razones: en primer lugar, porque el conflicto armado no ha finalizado en Colombia, en la medida en que siguen activos actores armados de vocación guerrillera –como el ELN– y paramilitar –como el Clan del Golfo–, así como dinámicas de confrontación militar, victimización y desplazamiento. A este escenario, se han sumado las llamadas “disidencias” de las FARC, grupos que no se acogieron al proceso de paz o que regresaron a la guerra en un periodo posterior a él.

En segundo lugar, porque se converge en la postura teórica y conceptual de autores como John Paul Lederach (2003), según la cual, los conflictos más que solucionarse o desaparecer, se transforman; evolucionan de la dimensión violenta a una dimensión pacífica, manteniéndose en las esferas política, social, económica e ideológica. Es decir, se trasladan de un plan militar a un plan civil. El proceso de paz ha tenido un impacto y relevancia fundamentales, pero un alcance limitado. Cerró uno de los capítulos más importantes de la violencia armada, al permitir silenciar los fusiles del principal grupo armado al margen de la ley en el país, pero no eliminó todas las expresiones de violencia en Colombia. Se tradujo, únicamente, en una paz parcial, limitada, frágil e imperfecta.

Ya que no solo se han perpetuado dinámicas de guerra, especialmente, en las regiones periféricas del país (como Chocó, Cauca, Catatumbo y Arauca), sino que ha subsistido un panorama grave de violencia en diversas esferas de la vivencia social y política. Los más de 700 casos de líderes sociales, defensores de derechos humanos y excombatientes asesinados desde la firma del acuerdo (Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz [Indepaz], 2019, p. 10) ponen en evidencia, de forma flagrante, esta situación.

Asimismo, quedan por afrontar las raíces profundas y las causas estructurales del conflicto armado, como la desigualdad socioeconómica, la exclusión política y la asimetría entre el campo y las zonas urbanas: síntomas de disfuncionalidades del sistema político, socioeconómico y cultural de Colombia. En ese sentido, el acuerdo de La Habana, no configura un punto final en el camino para la paz en el país, sino, más bien, un punto de partida. La paz se construye, es un proceso.

En realidad, la construcción de una paz sostenible y positiva, entendida como la existencia de condiciones de justicia social, la satisfacción de las diversas necesidades humanas y la eliminación de todas las formas de violencia –directa, estructural y cultural¹– (Galtung, 1996), implica transformaciones sociales profundas y un horizonte temporal a largo plazo. Exige procesos multidimensionales y a diversos niveles que requieren la participación de los distintos grupos políticos y sociales del país, así como de la sociedad en general. Como subraya Fisas (2006, p. 117): “Construir la paz es más difícil que terminar la guerra, e incluso, que hacerla”.

Es un proceso necesariamente inacabado e imperfecto (Muñoz, 2001), al igual que el ser humano. Sobre esto, Galtung comenta que jamás habrá una paz total: “lo que puede suceder es un mejor equilibrio entre la paz y la violencia” (Galtung, 1996, p. 17). Por esa razón, Francisco Muñoz se refiere al concepto de paz imperfecta, un camino inacabado, que se construye y se recorre cotidianamente. La paz positiva puede proyectarse como un ideal, un horizonte y una utopía, a la cual, únicamente, nos podemos acercar de manera progresiva.

1 Mientras la violencia directa se refiere al uso convencional de violencia, como el daño infligido por una persona contra otra, la violencia estructural tiene que ver con condiciones sociales injustas que limitan el potencial de un ser humano, tales como la represión, la explotación y la inequidad. En cuanto a la violencia cultural, pasa por los elementos culturales y simbólicos de legitimación de la violencia directa y estructural (Galtung, 1996).

Así, a menudo, un acuerdo de paz produce frustraciones políticas y sociales. Muchos proyectan en él expectativas irrealizables, lo ven como la solución a todos los problemas políticos de una sociedad, como una especie de *panacea* o *barita mágica*, capaz de solucionarlo todo. Sin embargo, su impacto potencial es limitado.

En la etapa de posacuerdo —en la cual Colombia se sitúa—, el país se enfrenta a múltiples desafíos políticos, institucionales, sociales y culturales, así como a diversos problemas, dilemas y cuestiones: ¿Cómo prevenir la reincidencia y transfiguración de la violencia? ¿Cómo lidiar con las heridas y traumas que cincuenta años de guerra han dejado en las víctimas, el tejido social y la cultura política? ¿Cómo promover procesos de verdad y memoria histórica que sean reparadores, sanadores y garantes de la no repetición? ¿Cómo generar nuevas formas de convivencia pacífica? ¿Cómo buscar la reconciliación en un país tan polarizado y fragmentado, como quedó claro en los resultados del plebiscito? ¿Cómo reintegrar a los excombatientes de la guerrilla en la sociedad y el sistema político? ¿Cómo fomentar una cultura de paz y tolerancia, en un país donde décadas de guerra han tenido fuertes repercusiones en los códigos y prácticas culturales? ¿Cómo democratizar la cultura política y estratégica? ¿Cómo generar una paz sostenible que sea transversal a todos los niveles y esferas de las relaciones sociales? ¿Qué actores podrán desempeñar un papel importante en este contexto?

Este libro pretende indagar y proyectar algunos de los retos a los que se podrá enfrentar Colombia en la etapa de posacuerdo, con base en el análisis de otras experiencias de posacuerdo y transición política, en el mundo y en el país. A partir de diversos casos de estudio, se propone establecer elementos de comparación con el actual caso colombiano, identificar y anticipar obstáculos, dilemas y riesgos, así como aportar propuestas y recomendaciones que puedan servir de referencia al presente escenario de posacuerdo.

Es el producto de la segunda fase del proyecto de investigación “Experiencias de paz: lecciones aprendidas para Colombia”, desarrollado por el Observatorio de Construcción de Paz y el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, cuyo principal propósito fue identificar enseñanzas para el momento político que vive, actualmente, Colombia, con base en una metodología comparativa.

La pregunta de investigación que sirvió de eje e hilo conductor al proyecto fue: ¿Qué enseñanzas para el posacuerdo en Colombia, se pueden extraer de otros procesos de paz y experiencias a nivel nacional e internacional,

especialmente, en lo concerniente a la construcción de paz, la implementación de los acuerdos, la verdad, la reconciliación, la justicia transicional y el DDR²?

Se buscó, por un lado, indagar cómo Colombia puede aprender de países y sociedades que han vivido procesos análogos de transición política –de la guerra a la paz–, teniendo en cuenta los elementos positivos aplicables al caso colombiano, como los errores que se deben evitar. Por otro lado, pretendió analizar los acuerdos de paz anteriormente firmados con grupos guerrilleros y paramilitares colombianos, con el ánimo de comparar y contrastar los retos políticos, jurídicos y sociales que se vivieron en esos momentos, con el presente escenario, así como identificar las lecciones aprendidas de dichos procesos.

El libro retoma la discusión planteada en el volumen anterior, en el cual, se analizaron once procesos y acuerdos de paz a nivel internacional, así como las etapas iniciales de implementación (Barreto, 2016). Se resaltaron lecciones aprendidas en tres campos: marco jurídico, DDR y construcción de paz.

Se postuló que, aunque cada conflicto armado es singular y único –debido a su historia, causas y contexto–, existen cuestiones transversales presentes en todos los procesos de negociación, transición y construcción de paz (Barreto, 2016, p. 373). Asimismo, a partir del análisis de los diversos casos de estudio, se subrayó que un acuerdo de paz no es un punto final, sino un punto de partida (p. 391), que trae tantos desafíos a un país como el mismo proceso de paz y el conflicto armado. No necesariamente la paz negativa se convierte en una paz positiva³. Construir paz es, en gran medida, construir sociedad (p. 392). Además, frecuentemente, se evidencian procesos de transfiguración y reincidencia de violencias.

En este segundo volumen, se redujo el número de casos de estudio, pero se amplió el marco temporal y las dimensiones a ser analizadas. Se reunió seis capítulos que se concentran en algunas dimensiones específicas de los contextos de posconflicto, posacuerdo y transición política; como la verdad, la reconciliación, la transfiguración de la violencia, el DDR, la justicia transicional, el rol de los *media* y de la comunidad internacional.

2 Desarme, Desmovilización y Reintegración

3 Johan Galtung (1996) distingue la noción de “paz negativa” –vista por él, como la antítesis o la ausencia de guerra– del concepto de “paz positiva”; el cual amplía, sustancialmente, el significado convencional de la paz, al relacionarlo con la justicia social, el desarrollo y una reestructuración profunda de las relaciones humanas.

En la primera parte del libro, se analizaron los casos de El Salvador, Guatemala y Perú. Los cuales, además de su cercanía geográfica, presentan similitudes en sus contextos históricos, bélicos y sociales, constituyendo buenos referentes comparativos para el caso colombiano. La experiencia de transición política en Argentina, a pesar de no configurar un caso de posacuerdo, fue también evaluada, ya que expone cuestiones similares a las del actual momento en Colombia. La segunda parte del libro, también se concentró en anteriores experiencias colombianas de posacuerdo, concretamente, el proceso de paz desarrollado al inicio de los 90, con guerrillas como el M-19, y el suscrito en el 2003, con las AUC.

Cada capítulo analiza las especificidades de los casos de estudio elegidos, su contexto, y la transición que hicieron entre la guerra y la paz; así como las lecciones aprendidas que pueden ser aplicadas en el posacuerdo en Colombia.

De la misma manera, la construcción de paz tiene varios frentes, dimensiones y espacios sociales—desde el ámbito político al jurídico, desde la seguridad a la cultura—; por esta razón, cada capítulo se centra en una temática distinta, con problemáticas y cuestiones propias.

El libro contiene una pluralidad de voces y miradas sobre la paz y el conflicto en Colombia. De igual forma, parte de distintos campos disciplinarios, con marcos teóricos y analíticos propios. Se encuentran y cruzan en él, la ciencia política, las relaciones internacionales, el derecho, la comunicación y los estudios de paz. Así que el eje articulador y la lógica común a todos los capítulos, es el análisis y la proyección de la paz en Colombia, a partir de diferentes experiencias de transición política e implementación de acuerdos, que permiten, como se mencionó anteriormente, vislumbrar diversos desafíos y lecciones aprendidas para el escenario de posacuerdo con la guerrilla de las FARC.

Así, en el primer capítulo, José David Moreno analiza el caso salvadoreño, en el cual, se perpetuó un escenario con diversos tipos de violencia (estructural, cultural, criminal). En este orden de ideas, el autor subraya las dinámicas de mutación que generaron nuevas formas de violencia, luego de la guerra y del acuerdo de paz firmado en 1992.

En el segundo capítulo, Angélica Alba Cuéllar se enfoca en el rol que la ONU desempeñó en los posacuerdos de El Salvador y Guatemala, destacando su importancia como ente verificador en la etapa de implementación de los acuerdos de paz, además del acompañamiento que hizo en el posacuerdo. Asimismo, evalúa los retos y especificidades de la misión de la ONU en Colombia.

En el tercer capítulo, Miguel Barreto Henriques toma como punto de partida a la Comisión de la Verdad y Reconciliación peruana, para proyectar los desafíos, riesgos y obstáculos de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad en Colombia. Más específicamente, en lo que concierne al trabajo por realizar en los campos de la verdad y reconciliación.

En el cuarto capítulo, Pablo Leonardo Uncos analiza el rol de los medios de comunicación en la experiencia de transición democrática argentina, concentrándose en los marcos reguladores de la actividad periodística, el comportamiento de las empresas de comunicación, los procesos de concentración empresarial y las relaciones entre el poder político y el “cuarto poder”.

En el quinto capítulo, Beatriz Suárez López examina los modelos de justicia transicional implementados en Colombia desde el 2005 –con los paramilitares– hasta el acuerdo de paz actual con las FARC. En este análisis, sostiene que estos modelos jurídicos son, también, mecanismos de construcción de paz.

Por último, Bibiana Rueda Rodríguez investiga el fenómeno de la reincidencia de desmovilizados en Colombia, desde el proceso de DDR de las AUC hasta el acuerdo de paz con las FARC, destacando la influencia de las variables de seguridad en los riesgos de reincidencia de desmovilizados.

Referencias

- Barreto Henriques, M. (Ed.). (2016). *Experiencias internacionales de paz: lecciones aprendidas para Colombia*. Bogotá: Universidad Jorge Tadeo Lozano.
- Fisas, V. (2006). *Cultura de paz y gestión de conflictos*. Barcelona: Icaria.
- Galtung, J. (1996). *Peace by peaceful means: Peace and conflict, development and civilization*. Londres: Sage.
- Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz. (23 de mayo de 2019). *Todos los nombres, todos los rostros: sobre las situación de lideresas y líderes sociales, de defensoras y defensores de derechos humanos y de excombatientes de las FARC-EP y sus familiares en los territorios* (Separata de actualización: Informe Conjunto Especial de Derechos Humanos). Bogotá: Autor.
- Lederach, J. P. (2003). *The little book of conflict transformations*. Intercourse, PA: Good Books.

Muñoz, F. (2001). La paz imperfecta ante un universo en conflicto. En F. Muñoz (Ed.), *La paz imperfecta* (pp. 21-66). Granada: Universidad de Granada.

Primera PARTE:

**Experiencias internacionales
de posacuerdo y transición**

Después de la guerra, la violencia: escenarios sociales en El Salvador luego de los acuerdos de paz de 1992

José David Moreno¹

Introducción

El presente texto es fruto de diversas reflexiones del orden teórico y conceptual, hechas en torno al caso salvadoreño en tanto que experiencia y camino recorrido, y cuyas vivencias pueden ser un acervo y una lección aprendida para el caso colombiano. El Salvador es el país más pequeño de América Central, y se lo ha denominado el “Pulgarcito”² de América Latina. Sin embargo, este pequeño país, con escasos seis millones de habitantes, vio nacer una de las guerrillas más aguerridas de la región y una de las más violentas guerras civiles

-
- 1 Historiador de la Universidad Nacional y administrador público de la ESAP, con estudios de maestría en Historia Moderna y Relaciones Internacionales de Universidad de Lyon; estudios de doctorado en Ciencia Política, en el Institut d'Études d'Aix-en-Provence; antiguo becario del Instituto de Investigaciones Estratégicas de la Escuela Militar de Paris (IRSEM); estudiante del doctorado en Historia de la Universidad Nacional de Colombia y especialista en Estudios Latinoamericanos, Historia Militar, Conflictos Armados, Seguridad y Paz. Investigador del Observatorio de Paz de la Facultad de Ciencias Sociales. Sus investigaciones han estado orientadas hacia los procesos de paz en América Central, así como la conversión de guerrillas en partidos políticos. Es coautor del libro *Experiencias internacionales de paz*, editado por la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano en 2016.
 - 2 Roque Dalton, uno de los más notables poetas de El Salvador y miembro de la guerrilla, dio este apelativo al Salvador a finales de la década de los setenta.

del siglo xx, dejando en una década cerca de 80 mil muertos y cientos de miles de víctimas (Wickham-Crowley, 1993). Es por esta razón que el caso salvadoreño se ha convertido en un referente y un objeto de estudio para múltiples académicos de Europa, Estados Unidos y América Latina. Para el caso colombiano, la experiencia de este país centroamericano representa una fuente inmensa de experiencias y lecciones aprendidas. El Salvador afrontó una cruel guerra civil (1980 y 1990), luego entró por los vericuetos de un proceso de paz (1990-1992), y finalmente, casi a ciegas, se vio inmerso en el camino del posconflicto (1992 a nuestros días), intentando explorar caminos de reconciliación y reconstrucción nacional. No ha sido fácil dicha tarea, y podríamos decir que las esperanzas creadas desde hace un cuarto de siglo, luego de la firma de la paz, se han venido eclipsando al calor de una oleada de violencias de orden físico, estructural y simbólico. Esta es pues una de las principales pretensiones de este escrito.

El objetivo central de este artículo es demostrar la hipótesis de que El Salvador ha estado inmerso en una serie o ciclo de violencias a lo largo del siglo xx, y esto se prolonga hasta nuestros días. Decimos pues que la violencia en este país, en lugar de haber desaparecido, ha mutado. Las razones para esta mutación están en una falsa idea de combatir simplemente la violencia directa o violencia física, dejando subyacentes todas las bases de una violencia estructural que se mantiene intacta a través de los años. En medio de esta discusión, emerge la idea de los procesos de paz y la firma del acuerdo en enero de 1992. Al parecer, muchas esperanzas de cambio y renovación se cifraron en este acuerdo, pero los resultados pragmáticos fueron magros al final. En esa lógica, esta presentación pretende responder a la pregunta ¿Cómo podemos evaluar y hacer un balance de los cambios de la violencia en el caso salvadoreño y qué lecciones deja para la Colombia del posacuerdo? Adicionalmente, pretendemos identificar algunas explicaciones de base que nos ilustren lo sucedido en El Salvador y la deriva que ha tenido el país en la actualidad, que lo han llevado a los más altos índices de violencia y criminalidad del continente³. Toda esta aproximación se justifica en la medida en que pueda servir para Colombia como experiencia y lecciones aprendidas. Detrás de la mirada de cada una de las experiencias internacionales, están todos los elementos, tanto positivos como negativos, que

3 De acuerdo con el informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) de 2013, “Seguridad ciudadana con rostro humano”, El Salvador se ubica junto a Honduras y Venezuela como uno de los tres países más violentos e inseguros de América Latina. Estos datos se basan en medias de número de homicidios por cada 100 000 habitantes, llegando El Salvador a tener alrededor de 80. Si se quiere tener una referencia países consideramos muy seguros llegan a 4 por cada 100 000 habitantes (ver informe PNUD).

pueden ser aplicadas a la Colombia vinculada a las dinámicas de un escenario de posacuerdo parcial⁴.

Para intentar dar respuesta a nuestras preguntas, el texto se estructura en cinco partes. Cada una de las partes busca defender a su vez una idea central que se convierte en argumento para el desarrollo de las hipótesis planteadas. La primera parte está orientada a la propuesta de lo que consideramos la evolución y mutación de diversos tipos de violencia en El Salvador, desde 1932 hasta nuestros días. Posteriormente, en una segunda parte, damos una mirada retrospectiva a los hechos más relevantes que han caracterizado el país luego de la firma de los acuerdos de paz, hace 25 años. Allí, tratamos de identificar tanto las rupturas que pudieron generar los acuerdos como las continuidades y los hechos que no se lograron transformar al seno de la sociedad. Una tercera parte aborda la mirada conceptual que busca en especial identificar el concepto de cultura de la violencia y establecer si este aplica o no al caso salvadoreño. En un cuarto momento, se dará una mirada del orden cuantitativo para ilustrar la actual situación de violencia y criminalidad que vive el país. El artículo se cierra con una breve reflexión que está orientada a dar una mirada de lo que podrían ser los otros rostros de la violencia, es decir, las representaciones de la violencia que van más allá de la violencia física o directa. Estos aspectos se podrán identificar en especial en la sociedad del posacuerdo que buscó la paz en 1992.

Los aspectos metodológicos de este trabajo están basados en gran medida en el desarrollo de dos visitas a El Salvador, desarrolladas en 2014 y 2016. En el curso de estos viajes, se realizaron más de veinte entrevistas a personajes de diversa índole tanto académica como política, destacando los encuentros con los principales líderes de la dirigencia del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y que participaron en la firma de la paz, así como algunos miembros de la administración de Alfredo Cristiani, quien fuera líder del partido Alianza Republicana Nacionalista, ARENA, presidente de El Salvador entre 1989 y 1994 y firmante de la paz en 1992. Ello se complementa con la revisión bibliográfica juiciosa que se desarrolló sobre el caso salvadoreño.

4 Nos basamos en este apartado en las hipótesis de Eduardo Pizarro (2017) quien ha insistido en la idea de paz parcelada dado que a diferencia de casos como el salvadoreño, en el cual la paz ha sido pactada con el conjunto de los actores armados, en Colombia no ha sido el caso. El hecho de que aún queden actores armados ilegales demuestra esa idea de paz parcelada.

En la búsqueda del silencio de los fusiles: acercamiento entre las partes y proceso de paz en El Salvador (1989-1992)

Luego de que la guerrilla del FMLN y el Gobierno de El Salvador (en adelante GOES) se hubieran enfrentado militarmente por más de una década, fue necesario llegar a la reflexión que imponía una negociación política que buscara una salida diferente a la militar (Samayoa, 2002). Las acciones violentas de noviembre de 1989 desarrolladas tanto por la guerrilla como por el ejército llevan a importantes reflexiones de ambas partes. Para finales de 1989, cuando los espectadores atónitos del mundo eran testigos de la caída del muro de Berlín, en El Salvador se llegaba a una situación que Zartman describe como “empate militar negativo” (Zartman, 1993, p. 48). Esto quiere decir que las dos fuerzas en enfrentamiento, luego de un significativo desgaste, no han llegado a una posición, si se quiere, cercana de derrota del enemigo.

En estas circunstancias, se requiere que ambas partes no solo perciban dicho “empate”, sino que también tengan una voluntad política para examinar la posibilidad de que la salida al conflicto no sea militar, y a partir de allí actuar en consecuencia. Ahora bien, la toma de conciencia de dicho empate y la idea de llegar a una negociación de carácter político no fue en su totalidad el resultado de una reflexión profunda de las partes implicadas.

Algunos factores externos a las partes van a influir en la idea de llevar al conflicto a su fin. En primer lugar, se encuentra el contexto internacional. El final de la guerra fría era inevitable y allí las reflexiones pesaron de forma significativa. La continuidad del conflicto podría convertirse en un absurdo, y en especial el FMLN podría perder importantes apoyos internacionales ante el inminente derrumbamiento del mundo socialista (Mayorga et al., 2014). A ello se añade el hecho de que, en febrero de 1990, se llevarían a cabo elecciones en Nicaragua, principal sostén económico e ideológico de la causa del FMLN. La retirada del poder por parte de los sandinistas era sin duda alguna, un elemento crucial en la estrategia política y militar del FMLN (Krujit, 2008). Por último, no debemos olvidar que acciones por parte de fuerzas del Estado, tales como el asesinato de los jesuitas de la Universidad Centroamericana en noviembre de 1989, generaron un estupor significativo a nivel internacional y pusieron a El Salvador en los titulares de la prensa mundial. La Casa Blanca que otrora incentivaba la lucha contrainsurgente durante los años Reagan, enviaba a finales de 1989, bajo la administración Bush, un claro mensaje al

Gobierno salvadoreño incitándolo a optar por la negociación política. Así pues, las partes comienzan a considerar seriamente la idea de la negociación política como fruto no solo del empate militar negativo, sino también como resultado de múltiples presiones del extranjero⁵.

Toda esta serie de eventos cambió la dinámica del conflicto e impulsó los acercamientos entre las partes con el fin de iniciar un proceso de paz. Desde junio de 1990 hasta enero de 1992, negociaron de forma permanente las partes implicadas (GOES y FMLN). Los tropiezos eran permanentes al igual que las intervenciones, en especial, la del Departamento de Estado de los Estados Unidos y la ONU con su secretario general. De no ser por estos últimos, el proceso hubiera fracasado. Las concesiones fueron múltiples de ambas partes y los enemigos de estas concesiones estuvieron constantemente al asecho (Entrevista con Eduardo Sancho, San Salvador, 14 de diciembre, 2016)⁶.

Finalmente, se llegó a un acuerdo *in extremis*, el 31 de diciembre de 1991 en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. La urgencia radicaba en que a la media noche de ese año nuevo terminaba la gestión del Secretario General Pérez de Cuéllar. Su intervención había sido tan significativa que su ausencia amenazaba el proceso mismo (Entrevista con Óscar Santamaría, San Salvador, 9 de junio de 2016)⁷. Era imposible dar vuelta atrás. Se llegaba al 16 de enero de 1992 como un punto de partida más que como un punto de llegada. La ceremonia en el castillo de Chapultepec representaba un evento altamente significativo.

A pesar de que se destinaron 18 meses, así como importantes recursos, los acuerdos del 16 de enero representaban aún un borrador. Se firmaron acuerdos generales, producto de las presiones, pero en especial de la prisa que imprimió el Secretario General. Así, sobre una base muy frágil se acordaron puntos de base, pero la negociación debería continuar a lo largo de todo el año de 1992. Una

5 A juzgar por las entrevistas realizadas, podemos decir que la apuesta de la guerrilla a finales de 1989 era entrar en posición de fuerza para una posible mesa de negociación. La idea de la toma del poder estaba descartada, pero sí querían demostrar fuerza militar. Esto resulta un aspecto destacable y nada despreciable que se puede convertir en una de las primeras etapas de la negociación.

6 Líder de la guerrilla Resistencia Nacional (RN). Delegado a las negociaciones de paz y firmante de la misma en 1992.

7 Líder del partido Alianza Republicana Nacionalista, ARENA. Ministro de justicia del Gobierno Cristiani y jefe de la Delegación del Gobierno para las Negociaciones de la Paz. Firmante de la paz en 1992 junto con Salvador Samayoa exguerrillero del FMLN, delegado a las negociaciones de paz en representación de las Fuerzas Armadas de Liberación (FAL).

situación igualmente particular en la que fue necesaria la negociación después de la negociación (Martínez, 2011).

Escenarios de posconflicto: rupturas y continuidades luego de los acuerdos de Chapultepec

Evidentemente, con los procesos de paz nunca se espera que los problemas de una nación sean resueltos de tajo. Tampoco se considera la firma de la paz como aquella barita mágica que de forma automática pueda decretar el final de un estado de guerra y el inicio de un estado de paz. En realidad, la paz es un proceso y no un momento. Más allá de lograrla se requiere construirla, mantenerla y prolongarla. Esto solo se materializa a través de un proceso colectivo de carácter social que logre sanar las múltiples heridas producidas por la guerra. Bien lo enuncia la obra de Galtung (1998): tras la violencia son necesarios tres aspectos fundamentales: reconstrucción, reconciliación y resolución y de allí queremos resaltar el prólogo de José María Tortoso quien plantea:

Partiendo de que la “paz es el camino”, nos indica que el alto al fuego, la tregua, el “hacer las paces”, aun siendo importante, no lo es todo. Más aún, que puede ser engañoso en la medida en que el “después de la violencia” puede convertirse fácilmente en un “antes de una (nueva) violencia” si no se entiende que por debajo de la violencia visible y directa hay siempre violencia estructural (conflicto, injusticia, contradicción) y una cultura de la violencia o una violencia cultural que no desaparecen mecánicamente con la firma del tratado de paz y que pueden seguir siendo fuente de la violencia visible. (Galtung, 1998, p. 10)

El 16 de enero de 1992, en el castillo de Chapultepec, se dieron cita muchas de las partes implicadas en el conflicto. La paz se estaba firmando y los aplausos invadieron el Castillo por extensos minutos. En las calles de El Salvador la sociedad salió igualmente a aplaudir el final de una guerra devastadora que no había dejado más que dolor y desastre para este pequeño país. Pero lo que se pudo percibir posteriormente, es que entre firmar la paz y alcanzarla existía un largo trecho.

La entrega de las armas por parte del FMLN se desarrolló a lo largo del año de 1992 en un contexto de profunda desconfianza, en el cual el Estado y el

gobierno salvadoreño no brindaban las garantías necesarias para efectuar la desmovilización (Entrevista con Facundo Guardado, San Salvador, 8 de diciembre de 2014)⁸. Fue entonces necesario que la comunidad internacional se encargara de dar las garantías necesarias para continuar con el proceso. Allí, se destaca el papel desempeñado por la ONUSAL que, si bien se consolidó antes del final de los acuerdos, resultó determinante en las primeras horas del posconflicto para garantizar el efectivo cumplimiento de los acuerdos.

El desarme de las partes, el final del conflicto salvadoreño y el control de la violencia fueron los principales desafíos del proceso de paz. Sin embargo, una vez terminada la guerra de manera oficial, persistió la violencia. Esta se expresa en un sensible aumento de la delincuencia que lleva como consecuencia tanto el robo como el asesinato, entre los delitos más comunes. A partir de 1993, cuando el Frente ya había entregado sus armas y se había desmovilizado en su totalidad, este factor de violencia e inseguridad amenazaba, de forma directa o indirecta, la efectiva posibilidad de un estado de paz. A esta crítica situación debe sumársele la profunda crisis del sistema judicial, completamente obsoleto, anquilosado en viejas prácticas y altamente dependiente del órgano ejecutivo, es decir, claramente anclado en las prácticas políticas y con falta de autonomía e independencia (Samayoa, 2002).

Amplias fueron las negociaciones entre la guerrilla y el Gobierno durante los meses de negociación de la paz en lo que concierne a temas de la agenda política y militar. No obstante, fueron escasos los debates de temas económicos y casi nulos los sociales.

A pesar de que se insistió en la mesa de negociación la necesidad de tener en cuenta el modelo económico, la postura del gobierno fue firme. La mesa de negociaciones no era, de acuerdo con ellos, el escenario ideal para ello. Si queríamos verdaderos cambios económicos o sociales, sería necesario hacerlos a través de la política y no por medio de un proceso de paz y mucho menos a través de la guerra. Así, el proceso de paz no sirvió más que para abrir los espacios políticos cerrados desde los años 1970 pero nada más. Eso fue una visión lamentable de la parte del gobierno y terminó por imponerse en los acuerdos finales. (Entrevista con Ana Guadalupe Martínez, San Salvador, 8 de junio de 2016)⁹

8 Exguerrillero del FMLN. Miembro de las Fuerzas Armadas de Liberación. Candidato a la presidencia por el FMLN en 1999.

9 Exguerrillera del FMLN. Delegada a las negociaciones de paz en representación del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). Firmante de la paz en 1992.

Las esperanzas e ilusiones de un país verdaderamente pacífico se fueron desmoronando conforme pasaban los años y se sucedían los gobiernos. Las raíces del conflicto estaban ampliamente determinadas por las desigualdades sociales y económicas y estas no se modificaron de manera sustancial: “Lo que se produjo en El Salvador fue un desencanto de la sociedad misma hacia el posconflicto dado que la paz no mejoró las condiciones de vida de sus habitantes” (Entrevista con Álvaro Cruz Rojas, San Salvador, 9 de diciembre de 2014)¹⁰. Se puso en evidencia, de esta manera, una ausencia del Estado y de sus mecanismos de acción a través de los cuales se le pudiera hacer un seguimiento efectivo a la modificación de lo podríamos determinar cómo las razones estructurales del conflicto. Encontramos pues que un esquema económico y de amplia desigualdad, sumado a la ausencia del Estado y la pobreza, representa un contexto sensible a la explosión de todo tipo de violencia. Los conflictos prolongados tienden, con frecuencia, a reproducir lo que Cerbino define como los ciclos de la violencia (Cerbino, 2011).

Dentro del caso salvadoreño, hallamos una transición o mutación casi constante de la violencia a lo largo del siglo xx. Podemos iniciar señalando una *violencia de carácter social* reflejada en las conflictivas relaciones entre hacendados/terratenientes y campesinos trabajadores de la tierra/pobres rurales (Almeida, 2011). Esta crítica situación se reproduce desde finales del siglo xix, y explota en 1932, luego de las revueltas campesinas. Es allí donde caerá asesinado y se inmortalizará el líder campesino Farabundo Martí, muerto junto a decenas de campesinos a manos del ejército (Rouquié, 1994). Posteriormente, se da paso a la *violencia política*, enmarcada dentro de un contexto más urbano en El Salvador de los años 1960. Sectores y capas medias de la sociedad buscan espacios de participación política. Sin embargo, el sistema político dominado por las elites bloquea estas iniciativas. La violación sistemática de los derechos de la población, en manos de gobiernos autoritarios, van poniendo en evidencia el cierre de los espacios de participación. Esta situación alentó la creación de grupos guerrilleros alzados en armas (Garibay, 2003). Con posterioridad, se dio paso a una *violencia militar* propiamente dicha con el estallido de la guerra civil en 1980 a través de la creación del FMLN y la expansión de la guerra a todos los rincones del país. Inmersa en la guerra, la sociedad civil sufre los embates de los enfrentamientos de diversas fuerzas: guerrillas, policías y fuerzas armadas. Luego de la paz y en marco del posconflicto, se llega a la *violencia delictual*, especialmente orientada a la emergencia de bandas y pandillas urbanas que fueron

10 Periodista, columnista y editor del diario *El Mundo* de circulación cotidiana en El Salvador.

ocupando espacios cada vez más notorios dentro del tejido social salvadoreño (Brenneman, 2013). El Salvador, desde finales de la década de los noventa, se fue encontrando con la gestación de un nuevo tipo de violencia. Una última violencia que viene sumarse a las demás “violencias” del país (White, 2001).

En todas estas décadas de diversidad de conflictos, podemos referenciar cómo la violencia se va convirtiendo en una especie de impronta que muchas veces, sin proponérselo, deja huellas sensibles en la sociedad. De allí la importancia y la sensibilidad que implica la reconstrucción de dicho tejido social, logrando dejar atrás los traumas de la violencia en sus diversas fases (Moreno, 2017). Todos estos son, desde luego, aspectos que quedaron fuera de las agendas de negociación. Deliberadamente o no, las partes implicadas buscaron una salida política dejando en un segundo plano importantes elementos del orden social y económico que resultaban trascendentales en la idea de romper con esos diversos ciclos de violencia (Moreno, 2018a).

En esencia, lograr consolidar verdaderos procesos de paz resulta un desafío de amplia envergadura. Reconciliar a la sociedad y a los actores armados es un proceso que no se puede dejar al azar. Podemos arriesgarnos a decir que en El Salvador luego de la euforia de los acuerdos de paz hubo un desencanto progresivo. El Frente se convirtió en partido político legal y participó en sus primeras elecciones en 1994. En el año 2000, el partido de la que otrora fuera una guerrilla se convertía en mayoría en el Congreso, y en 2009, el FMLN ganaba las elecciones presidenciales (Nasi, 2007). Pero esto no significa que haya existido en el país un verdadero proceso de reconciliación. Esto tampoco significa que para la mayoría de la población haya habido un cambio significativo en las condiciones de vida ni en las oportunidades educativas, sociales o laborales. Temas tan complejos como el de la desigualdad social nunca se solucionaron. Así, se le abrió paso a una *violencia delincencial* que pone de manifiesto los múltiples errores por parte del Estado, en la voluntad de darle seguimiento a reales procesos de construcción y mantenimiento de la paz.

Ahora bien, se hace necesario establecer un breve balance y responder a la pregunta ¿Qué cambió y que siguió igual?, en otras palabras, ¿cuáles fueron las rupturas y cuáles las continuidades entre El Salvador previo a la firma de los acuerdos de paz y El Salvador del posconflicto? Dentro de ese balance, encontramos que muchas de las cosas que aportó el proceso de paz fueron positivas. En primer lugar, es necesario decir que la desmovilización del FMLN fue efectiva. Si bien existieron muchas amenazas y hubo casos aislados que hicieron pensar que el conflicto se podría reiniciar, no se llegó a tal escenario. Ni siquiera el descubrimiento de unos importantes depósitos de armas del FMLN, tanto en

territorio nacional como extranjero, que no fueron entregadas a la ONU, logró derrumbar el proceso de desarme y reinserción de la guerrilla. El asesinato de algunos desmovilizados en los meses posteriores al acuerdo tampoco logró amenazar seriamente el proceso. En realidad, esto fue resultado de la constante desconfianza que reinó entre las partes a lo largo de todo el camino en la búsqueda de la paz (Samayoa, 2002).

Al mismo tiempo, se llevó a cabo una reforma de las Fuerzas Armadas y la Policía efectiva y genuina dentro de la región. No sin resistencia, desde luego. Y era de esperarse dado que los cuerpos de seguridad dominaron parte del espectro político desde la década de los treinta. Con las ayudas mencionadas de parte de la administración Reagan a las Fuerzas Armadas y de Policía en los años ochenta, su poder se incrementó aún más (Moreno, 2018b). En realidad, se convierte en un hecho representativo y tal vez admirable que las fuerzas armadas hayan dado un paso al costado para permitir que fluyeran nuevos procesos:

Las reformas a la Policía y las Fuerzas Armadas son tal vez uno de los puntos que mejor funcionó dentro de la negociación. Luego de la firma de los acuerdos se dismantelaron los tres cuerpos de Policía¹¹¹ y se creó uno nuevo, con una nueva doctrina y con una dirección cívico-militar¹²¹². Al mismo tiempo, se logró hacer ajustes significativos al interior del ejército que permitieron darle una nueva orientación a esa institución. Lo que hoy tenemos son fuerzas diametralmente opuestas a las que conocimos hace 25 años y con las que tuvimos que luchar de forma tan feroz. (Entrevista con Francisco Jovel, San Salvador, 7 de junio de 2016)¹³

Con la desmovilización del Frente y la reestructuración de la Fuerza Armada terminaba la violencia militar. Este proceso se consolidó con la conversión del FMLN en partido político desde 1994. Entonces, apreciamos un cambio significativo en la cual el Frente cambió la guerra por los espacios políticos y democráticos.

11 Policía de Hacienda, Policía Nacional de El Salvador y Guardia Civil.

12 Policía Nacional Civil, que entra en funciones a partir de 1994.

13 Exguerrillero del FMLN. Delegado a las negociaciones de paz en representación del Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos (PRTC). Firmante de la paz en 1992.

No obstante, con la llegada de los cambios también se evidenciaron las continuidades. Resulta sumamente complejo lograr prever a futuro cuáles serán las falencias de los procesos en el presente. Tal vez eso fue lo que le sucedió a la mesa de negociación entre 1990 y 1992. No había posibilidad de previsión de los errores y las fracturas que se le escapaban al proceso. De igual forma, estos errores eran difíciles de apreciar en medio de la angustia y el afán impreso por el Secretario de Naciones Unidas para la firma del acuerdo. En fin de cuentas, lo que podemos afirmar es que la negociación se volcó básicamente hacia lo político y lo militar, dejando serios vacíos en otros espacios que hubiera sido necesarios de tener en cuenta.

Dentro de las continuidades, tal vez la que más se debe lamentar es la de la violencia como se ha venido enunciando hasta aquí. Como se sustenta en este trabajo la violencia ha mutado. Pero el factor de fondo es que esa violencia sigue estando presente en la sociedad salvadoreña. La desigualdad marcada y la falta de oportunidades para un núcleo importante de la sociedad, se manifiesta como una constante, como una continuidad. De esa forma, la violencia no desaparece. Con los acuerdos de paz no existió en El Salvador una política de Estado convincente que buscara acabar con la violencia en la era del posconflicto (Moreno, 2018b).

Esta situación se explica por dos variables fundamentales. En primera medida, por una clara falta de voluntad política. El país continuó a merced de la derecha representada en ARENA, durante dos décadas más, luego de los acuerdos. Este partido tenía claras conexiones y alianzas con las élites económicas al igual que con los medios de comunicación y algunos sectores conservadores. Dichas élites nunca aprobaron de buena gana los acuerdos de paz. Por ende, la política y posición de los gobiernos de ARENA fue la de mantener una continuidad del esquema político, social y económico, al igual que evitar a todo precio el ascenso político del FMLN.

En segunda medida, está el tema financiero. Si se considera que la guerra cuesta, se debe comprender que la paz puede ser aún más costosa. En otras palabras, un proceso de construcción y mantenimiento de paz requiere compromisos sociales, pero también importantes inversiones de carácter económico. En un primer momento, la ONU y países como Suecia y Noruega, a través de procesos de cooperación para el desarrollo, estuvieron vigilantes de que los acuerdos de paz se cumplieran (Samayoa, 2002). Estos países y organizaciones garantizaron que las primeras horas del posconflicto fueran efectivas. Sin embargo, una vez se retiraron o se acabaron las ayudas, las políticas de Estado del posconflicto se desplomaron: “El Salvador adoleció de una verdadera estructura

financiera capaz de ofrecer continuidad a las políticas iniciadas por los actores internacionales” (Entrevista con Héctor Dada, San Salvador, 8 de junio de 2016)¹⁴. Y ese desplome es básicamente explicado por la falta de recursos dado que El Salvador no disponía del músculo financiero necesario para soportar una política de Estado de largo aliento (Cardenal & González, 2007). Así las cosas, al no existir una política de Estado decidida a acabar con las raíces del conflicto, la violencia tiene un espacio para su resurgimiento. Si bien la violencia no explota de la misma forma que en la década de los ochenta, se registra un fenómeno cuya principal víctima es la sociedad civil.

El Salvador contemporáneo es testigo de cambios en los modelos de comportamiento urbano y social después de los acuerdos de paz. A partir de 1994, con llegada masiva de deportados provenientes de los Estados Unidos que a su vez son miembros de las pandillas en ese país, se reproduce un fenómeno sumamente complejo para los salvadoreños (Bruneau, Dammert, & Skinner, 2011). Se efectúa de esta forma una modificación de carácter social de orden sustancial. En El Salvador de hoy, encontramos que estos pandilleros son uno de los actores más importantes y se convierten en los principales protagonistas de la violencia. Sus acciones están basadas en el robo y la extorsión en los centros urbanos (especialmente el comercio y los transportes). Más allá de estas prácticas está la ejecución de otras tales como el tráfico de drogas y de personas (migrantes irregulares hacia los Estados Unidos). A este propósito, el antiguo director de la Policía de El Salvador hace el siguiente análisis:

A pesar de que las pandillas sean un actor central en las problemáticas nacionales, ellas no representan el único fenómeno a tener en cuenta. Existen múltiples pequeñas bandas organizadas dedicadas igualmente al crimen, pero fuera del marco de las maras. Con esto, yo quiero decir que no es del todo correcto pensar que la violencia y la criminalidad son la consecuencia única y absoluta de las maras. El modelo social y económico de El Salvador lleva a la delincuencia en tanto que sistema de vida. Nosotros hemos luchado contra este fenómeno pero en muchas ocasiones va más allá de nuestras capacidades. Hay problemas del orden transnacional tales como el tráfico de drogas que nos exigen un esfuerzo internacional. Es por esto que debemos trabajar asociados con Honduras y Guatemala de la mano de los Estados Unidos para llegar a

14 Economista e intelectual salvadoreño. Investigador FLACSO. Antiguo Ministro de economía de la administración Funes (2009-2014).

luchar contra este flagelo. (Entrevista con Howard Cotto, San Salvador, 6 de junio de 2016)¹⁵

Tanto la Policía como la Fuerza Armada han dado prueba de cambios sustanciales desde el punto de vista institucional (Córdova, 1999). Estos cambios permitieron que la sociedad en su conjunto no los vea más como una amenaza. Los abusos cometidos por la población prácticamente han desaparecido, al igual que los grupos paramilitares conocidos bajo el nombre de escuadrones de la muerte durante la guerra civil. En la actualidad, existe una nueva línea de acción y una nueva doctrina al seno de las fuerzas armadas. Dicho esto, concluimos que los grandes protagonistas de la violencia y la criminalidad son actores ajenos al Estado.

Superando los estereotipos del caso salvadoreño: más allá del mito de la “cultura de la violencia”

Para cualquier investigador que se lanza en la búsqueda de archivos y la exploración de prensa salvadoreña, puede rastrear, a través de artículos y editoriales, que se confluje con frecuencia a afirmar que en El Salvador existe una cultura de la violencia. Autores como Allison (2006) nos refuerzan esta idea. Sin embargo, resulta fácil hacer este tipo de juicios de valor, pero resulta más complejo poderlo argumentar. Al dar una mirada al caso salvadoreño, nos encontramos con un ciclo de diferentes clases de violencia en permanente movimiento que nos impele a pensar que existen problemas de carácter estructural, en los cuales justamente la violencia puede considerarse como un agente social. El debate que se abre en torno a este aspecto es inmenso, y por demás arriesgado, dado que mayor parte de las veces ha sido terreno la de los antropólogos entrar a definir conceptos tales como la *cultura de la violencia*.

Resulta pertinente, entonces, tratar de acercarnos a la idea de lo que la cultura significa para después intentar abordar el concepto global de cultura de la violencia. Sin embargo, se hace importante aclarar que lo que en este breve espacio se pretende no es llevar a cabo una antropología de la violencia, ni mucho menos realizar un esbozo teórico de la violencia como factor social. Lo que

15 Exguerrillero del FMLN. Antiguo director de la Policía Nacional Civil de El Salvador.

aquí se busca es tener un sustento conceptual a fin de poder determinar si en casos como los de El Salvador podemos pensar en el desarrollo e implantación de una cultura de la violencia, a partir del análisis de los diferentes ciclos de la violencia que se han presentado.

Cliford Geertz (2000) es sin duda alguna uno de los referentes más importantes a la hora de acercarnos al concepto de cultura. Si bien otros antropólogos de la talla de Edward Tylor y Bronislaw Malinovsky merecen una mención importante, Geertz se convirtió, desde la década de los ochenta, en un punto de convergencia teórica altamente significativo. En síntesis, el autor plantea que la cultura se desarrolla a partir de imaginarios y símbolos. Así, es trabajo del investigador social, interpretar esos símbolos y poder determinar y comprender dicha cultura. La cultura está fuertemente amarrada a temas como la costumbre, los hábitos y los valores de un grupo social. Este grupo de valores y de hábitos se transmiten y se heredan de generación en generación, convirtiéndose así en un factor cultural que caracteriza a un determinado grupo social. Así las cosas, podemos decir que la cultura es un esquema de concepciones heredadas históricamente transmitido, una carga simbólica con la cual un grupo social se siente identificado y representado (Wacquant, 2004). Es, en últimas, una forma de comunicación que afecta y determina las acciones de los individuos miembros de dicha sociedad.

En ese orden de ideas, pensar que existe una cultura de la violencia puede convertirse en una concepción ambiciosa y arriesgada. Puesto que partiríamos del hecho de que toda la sociedad, para nuestro caso la sociedad salvadoreña, comparte la violencia como un patrón, un hábito o un valor colectivo. Nada más lejano a la verdad que esta concepción que nos llevaría a afirmar que los salvadoreños en su conjunto son violentos culturalmente, y que esta cultura se transmite de generación en generación. De esa manera, del análisis estaríamos más bien llegando al cliché y al prejuicio. Entonces, hasta este punto queremos dejar claro que no concebimos la violencia, en el caso salvadoreño, como un elemento determinante de la cultura de este país.

Hasta aquí el problema no está del todo resuelto. Para avanzar en la definición de los conceptos hemos de recurrir a un gran clásico de los estudios de paz, a saber, Johan Galtung. Su propuesta es alejarse del concepto antropológico de cultura de la violencia que, como mencionamos, no nos brinda las herramientas necesarias para dar respuesta a nuestro problema. En vez de ello, Galtung nos propone más bien hablar de violencia cultural en lugar de cultura de la violencia. Según el autor, no existe una cultura de la violencia, existen aspectos de una cultura que son violentos. Este tipo de definición puede ayudarnos

mucho a precisar esos aspectos de la sociedad que tienen una interconexión directa con la violencia. De esta forma, el autor nos habla de un triángulo de la violencia en cual se entrecruzan la violencia directa, la violencia estructural y la violencia cultural:

La violencia directa, física y/o verbal, es visible en forma de conductas. Pero la acción humana no nace de la nada, tiene raíces. Se indican dos: una cultura de la violencia (heroica, patriótica, patriarcal, etc.) y una estructura que en sí misma es violenta por ser demasiado represiva, explotadora o alienadora; demasiado dura o demasiado laxa para el bienestar de la gente [...] la violencia estructural y cultural causan violencia directa, utilizando como instrumentos actores violentos que se rebelan contra las estructuras y empleando la cultura para legitimar su uso de la violencia. (Galtung, 1998, p. 15)

Apoyados en esta propuesta, entendemos que existe una violencia directa, que es la que vemos, la que percibimos y tal vez la que más nos preocupa. Es lo que podríamos denominar: el acontecimiento. Pero al final de cuentas, este acontecimiento resulta pasajero y vendrá una serie de nuevos acontecimientos que continuarán horrorizándonos, y siempre se buscará que ese acontecimiento no vuelva a suceder. La violencia estructural, que es menos visible o en ocasiones invisible, es la que nos da el verdadero trasfondo de la violencia, es el proceso. Un proceso que con el tiempo va echando raíces dentro de los patrones y las estructuras sociales.

Para el caso salvadoreño, podríamos pensar en todas las décadas de exclusión por parte de las élites, en especial rurales, hacia las mayorías campesinas. El Salvador, un país volcado hacia la economía agraria, en especial la producción de café, tuvo un marcado trato deferente hacia los sectores populares rurales. Los bajos salarios (cuando existían), los precarios sistemas de mano de obra, el analfabetismo y la casi imposibilidad de acceso a la tierra marcan un esquema claro de violencia estructural (Almeida, 2011). Esta exclusión de carácter elitista también va a reproducirse en las grandes ciudades a lo largo de las décadas siguientes. El sistema de maquilas del textil al servicio del mercado norteamericano contribuyó a reproducir ese proceso de desigualdad. Como en el campo, el trabajo urbano presentaba bajos salarios y condiciones muy precarias para los trabajadores. Si bien existieron momentos en los cuales el régimen militar permitía la movilización social, en general, se desarrollaba un marco represivo muy fuerte (Rouquié, 1994). A partir de 1972, la

radicalización de los militares impidió cualquier tipo de reivindicación social. A todo este entramado podemos añadir una violencia de carácter simbólico en el sentido señalado por Bourdieu (Bourdieu REDCOL, 2012)¹⁶. Esta violencia se ve ampliamente representada en la configuración urbana en El Salvador contemporáneo. Cualquier visitante desprevenido puede advertir la existencia de una suerte de “segregación” social, al ver cómo importantes sectores de la capital hacen gala de un lujo que contrasta seriamente con la pobreza de las periferias de ciudades aledañas a la capital. Periferia donde habita el grueso de los trabajadores y habitantes más humildes que se desplazan diariamente a la capital para ponerse al servicio del mercado de bienes y servicios cotidianos de San Salvador. Es indudable el nivel de exclusión que se expone en este marco a través del cual los sectores populares se ven relegados por sectores de la élite que reproducen y mantienen este modelo.

Es en ese proceso donde se consolida una violencia de carácter estructural y, en cierta medida, simbólica. Es a su vez una violencia que casi nunca es atacada o señalada como responsable de lo que llamaríamos los acontecimientos. La violencia cultural, en cuanto a ella, es especialmente una constante. Galtung la define como “la suma total de todos los mitos de gloria y trauma y demás que sirven para justificar la violencia directa” (Galtung, 1998, p. 32), en otras palabras, es cualquier aspecto de una cultura susceptible de ser utilizado para legitimar la violencia directa. Es una vía de escape; es una reivindicación o alternativa que puede tomar la sociedad para expresar la frustración, rabia o descontento. Al identificar al otro y que ese otro es señalado como culpable o enemigo, tenemos la plena legitimación para activar un acontecimiento que alude, sin duda alguna, a la violencia directa.

Si dentro de toda esta discusión vinculamos la idea de la paz, o por lo menos la negociación de la paz, tenemos que es importante dimensionar los tres aspectos de la violencia mencionados por Galtung. Es decir, no se puede solo llegar a la negociación pensando en el final de la violencia directa pues estaríamos condenados al fracaso. Si no se analizan las raíces del conflicto, si no se ataca la violencia estructural y cultural, la violencia puede resurgir.

16 Pierre Bourdieu ha introducido el concepto de violencia simbólica en sus postulados. Al respecto indica que esta violencia es: “La noción de violencia simbólica designa una forma que podríamos llamar “dulce” y casi invisible. Es una violencia que desempeña un papel importante en muchas relaciones humanas [...] se podría decir que es una violencia que se ejerce con la complicidad de conciencia de quien la sufre [...] realmente la violencia simbólica se ejerce con la complicidad de la estructura cognitiva que no es conocida, que son las estructuras profundamente incorporadas, las cuales se aprenden a través de la manera de comportarse”.

El alto al fuego se convierte en un mero periodo de entre guerras, una ilusión perpetrada sobre un pueblo con demasiada fe en sus líderes. A continuación se crea un sentimiento de desesperanza a medida que la gente empieza a darse cuenta del círculo vicioso: las estructuras violentas solo se pueden cambiar mediante la violencia; pero esa violencia llevara a nuevas estructuras violentas y además reforzará una cultura bélica. (Galtung, 1998, p. 15)

Con esta aproximación, podemos explicar mejor lo sucedido en El Salvador y en muchos otros casos que tendrían cabida dentro de esta definición. Los ciclos de la violencia se perpetúan debido a una ausencia de atacar las raíces de los conflictos. El mismo Galtung propone como tesis que la violencia estructural y la cultural solo se pueden combatir a través de la reconstrucción, la reconciliación y la resolución. Pero podríamos también añadir que la violencia se combate con decisión y compromiso por parte de todos los actores, en especial el Estado, para cambiar la situación y pensar en un escenario futuro diferente.

De esta forma, concebimos que en lugar de acceder a un elevado compromiso afirmando que existe una cultura de la violencia, en casos como El Salvador, tenemos más bien una violencia cultural. Con esta aproximación, evitamos caer en el cliché, y podemos acercarnos de una mejor forma a la problemática estudiada así como sus respectivos análisis. De tal suerte, podemos afirmar que la cultura de la violencia es tal vez un mito o una falsa aproximación dado que ninguna sociedad en su conjunto comparte la violencia como valores, hábitos y costumbres heredados a través del tiempo. La violencia no es un bien común capaz de crear significados en el conjunto de una sociedad. La violencia existe, indudablemente, pero no puede ser adjunta al conjunto de una sociedad de una forma tan determinante y simple. En suma, la violencia no puede ser el elemento que identifique a una sociedad y sea agente de identidad. De allí, la propuesta de pensar que la cultura de la violencia es un mito y que aquel lugar común de las discusiones públicas carece de un real fundamento.

Violencia y criminalidad en El Salvador: ¿posibles daños colaterales del proceso de paz?

Una vez firmados los acuerdos de Chapultepec en enero de 1992, comienza en El Salvador un periodo de nuevos desafíos con una alta dosis de optimismo

luego de finalizar una guerra civil tan sangrienta. Los salvadoreños creyeron poder alcanzar finalmente la paz. Pero, como lo dice muy bien Galtung, la paz no debe entenderse como el silencio de los fusiles.

Como se ha señalado, en el periodo de posacuerdo los retos de reconstrucción, y reconciliación eran enormes. La comunidad internacional brindó un apoyo significativo entre los años de 1992 y 1994. Es de destacar el apoyo de las Naciones Unidas, Suecia y Noruega en planes y proyectos para la reconstrucción del país. Sin embargo, una vez estas ayudas terminaron, se fueron extinguiendo las políticas públicas en torno al posconflicto (Martínez, 2011). El país entró de una forma abrupta en el modelo neoliberal de la época y la crisis económica no se hizo esperar (Almeida, 2011). De esta forma, las esperanzas de cambio se desvanecieron para al grueso de la población. La desigualdad, la pobreza y la falta de oportunidades continuaron manteniendo los ritmos de épocas pasadas.

Las maras y la delincuencia común: la nueva arista de la violencia

En ese marco, la violencia y la delincuencia común se fueron desarrollando al interior de las ciudades salvadoreñas. En muy poco tiempo, se fue haciendo conocido el fenómeno de las pandillas urbanas juveniles, más conocidas como Maras (Cerbino, 2011). El origen de estas pandillas tiene una relación indirecta con la guerra civil de la década de los años 1980. La grave situación social y la crisis vivida durante estos años expulsaron a miles de salvadoreños hacia el exilio. Durante los años de la guerra, se produjo un flujo enorme de migrantes que en su mayoría se dirigieron hacia los Estados Unidos. Alrededor de 400 000 salvadoreños dejaron el país en la década de los años 1980 (Museo de la Palabra y la Imagen [MUPI], 2012). Este flujo migratorio traería diversas consecuencias para el país en términos sociales y económicos.

El destino preferido de los migrantes salvadoreños que iban a los Estados Unidos fue la ciudad de Los Ángeles, en el Estado de California. En esta ciudad, hacían igualmente presencia de migrantes de otros países centroamericanos, así una destacable presencia de migrantes mexicanos. En los barrios latinos de la ciudad de Los Ángeles, se fueron estructurando, desde la década de los ochenta, pandillas urbanas que peleaban por el control de territorios y controles de rutas de microtráfico. Los mexicanos entraron rápidamente en rivalidades con los salvadoreños que comenzaron a llegar de forma masiva como consecuencia de la guerra en su país, y amenazaban sus estructuras económicas. Estas pugnas obligaron a su vez a la consolidación de pandillas urbanas de salvadoreños,

que fueron evolucionando y vinculándose rápidamente al crimen organizado. Ante el crecimiento inevitable del fenómeno delincriminal, las autoridades norteamericanas procedieron a judicializar y encarcelar a miembros de estas pandillas. Posteriormente, se procedió a la deportación de forma masiva de estos pandilleros (Ward, 2013). El Salvador del posconflicto debe asumir de forma inesperada una masiva llegada de deportados de Estados Unidos. Muchos de estos pandilleros no hablaban español, no tenían familiares ni contactos en el país y el Estado salvadoreño careció de una política clara de recepción e inserción de esta población flotante que recién se acomodaba. Estos jóvenes (en su mayoría hombres) deportados llegaron a El Salvador con un saber hacer precario marcado y orientado por un pasado delincriminal. Es por esto que no tardarían en estructurarse pandillas urbanas en las principales ciudades del país para continuar ejerciendo la violencia el crimen y el delito (Bruneau et al., 2011).

De estas pandillas se destacan dos grandes grupos: la mara *Salvatrucha* y la *Barrio 18*. Estas pandillas comenzarán a rivalizar entre sí por el control y el dominio territorial. En dicha guerra, nuevamente la población al margen de las prácticas y actividades de las pandillas se convierte en víctima de sus acciones. El poder que llegan a gestar es tan significativo que los lugares que comenzaron a controlar se convirtieron en zonas en las cuales las fuerzas del Estado no podían penetrar (Breneman, 2013).

La extorsión, el robo, el asesinato y otro tipo de prácticas se fueron volviendo comunes. Las pandillas o maras se fueron estableciendo como cofradías juveniles con identidad particular y objetivos claros. La violencia sería su canal de expresión. Con el tiempo, acciones como el tráfico de estupefacientes y la trata de personas fueron ampliando de forma importante las arcas de estas agrupaciones que daban el salto a organizaciones del crimen. Lo cierto es que la violencia resurgió en El Salvador con índices avasalladores (Entrevista con Howard Cotto, 2016).

No podemos afirmar que las maras son una consecuencia directa de la guerra civil de los años ochenta. No obstante, no la podemos desligar del todo: “los medios de acción de las pandillas de hoy nos recuerdan constantemente aquellos métodos utilizados en tiempos de guerra” (Entrevista con Howard Cotto, 2016). Es decir, se pueden precisar algunos vasos comunicantes que nos pueden ayudar a comprender el fenómeno. Allí se sustenta la idea de una mutación de la violencia expresada en un nuevo ciclo que hemos denominado delincriminal. Un dato que resulta significativo es el accionar o *modus operandi* de las pandillas: sus acciones violentas pueden recordar la crueldad y la barbarie que fueron utilizadas tanto por la guerrilla como por las fuerzas del Estado

en la época de la guerra civil. En todo este marco de violencia, inseguridad y criminalidad, la población civil (pequeños empresarios, trabajadores, independientes y trabajadores informales) es víctima de las diversas acciones de las pandillas urbanas. La policía se ha declarado impotente ante el crecimiento y el accionar de estos grupos criminales. Importantes despliegues militares conocidos como *plan de mano dura* y *plan mano más dura* por parte de los gobiernos de ARENA, en la década pasada, no dieron ningún resultado efectivo.

Dicho esto, resulta pertinente decir que los vasos comunicantes que rastreamos se hallan más en el orden cultural y sociológico que militar. El trabajo empírico y de terreno permite evidenciar y afirmar que las maras no son de ninguna manera resultado de antiguos desmovilizados de la guerrilla que hayan podido liderar la conformación de estas pandillas. Tampoco resulta de una suerte de remanente bélico y de armas que no hubieran sido entregadas durante el proceso de desmovilización y que hubieran circulado de forma latente y ausente de control del Estado. El fenómeno de las maras es resultado justamente de las falencias en la atención de la violencia estructural, bajo los parámetros que se han esbozado anteriormente. Así, mientras que en los años sesenta y setenta el panorama de exclusión social –y en gran medida política– da como resultado la explosión de la guerra civil, en la década de los noventa, será nuevamente la exclusión social y la ausencia de oportunidades más claras para la sociedad las que van a alimentar un escenario de violencia delincriminal.

Violencia y criminalidad en El Salvador

El fenómeno de la violencia y la criminalidad en El Salvador se han convertido en una problemática del orden transnacional que ha penetrado las fronteras de los países vecinos. De tal suerte, encontramos la presencia de pandillas en países como Guatemala y Honduras. En el curso de la última década, el Triángulo Norte de Centroamérica se ha convertido en uno de los más serios problemas en términos de violencia y criminalidad en la región latinoamericana. A excepción del caso venezolano, América Central denota los más altos índices de violencia y criminalidad de la región latinoamericana, y a su vez América Latina mantiene la tasa más alta de homicidios en el mundo (Human Rights Watch [HRW], 2019). Ya al interior de la región, observamos, de acuerdo con los informes del PNUD, que Honduras sería el país más violento del continente, seguido en segundo y tercer lugar por Venezuela y El Salvador, respectivamente, con una tasa de cerca de 50 homicidios por cada 100 000 habitantes (PNUD, 2014).

Es importante decir que la estructura de la delincuencia, por lo menos en lo que respecta a El Salvador, no recae de forma exclusiva en las pandillas o maras como se ha mencionado anteriormente y como lo confirmó el director de la Policía. Con esto, se sugiere que las víctimas fatales que se producen en El Salvador no son de resorte exclusivo de las pandillas. También se encuentran crímenes de carácter ordinario perpetrado por delincuentes comunes.

Al lado de la criminalidad que se ha venido desarrollando en El Salvador, resulta fundamental señalar la llegada del fenómeno del narcotráfico a la región centroamericana. Como consecuencia de la lucha contra las drogas en Colombia desde finales de los noventa, se ha podido apreciar un desplazamiento del fenómeno del narcotráfico hacia la región de América Central y México (Entrevista con Howard Cotto, 2016). A pesar de que el flujo del tráfico de estupefacientes es significativo en la región centroamericana, no podemos hablar en la actualidad de crimen organizado, mafias o carteles de la droga en la región. Aparte de las maras, no existen organizaciones criminales estructuradas como se puede evidenciar en el caso mexicano. No obstante, los ciudadanos centroamericanos y en especial salvadoreños, resienten los efectos de este fenómeno contemporáneo. La sociedad civil tiene una pésima percepción de esta situación de seguridad y considera que las pandillas son la principal preocupación y la principal causa de violencia en el país (Motlagh, 2019).

De acuerdo con el PNUD, mientras que en 2009 las maras no eran una preocupación tan significativa para los ciudadanos, en 2012, el fenómeno se ha vuelto agobiante. Es posible que dentro de la población no exista una clara diferencia entre maras y delincuencia común. Este dato podría sugerir que las maras no son concebidas por los ciudadanos como el problema global de la delincuencia y que al lado de estas existen problemáticas de criminalidad paralelas

Escenarios prospectivos para El Salvador

Los temas de seguridad, violencia y criminalidad permanecen dentro de las principales preocupaciones del desarrollo de la vida cotidiana de la sociedad salvadoreña. En efecto, es lo que más resienten y es uno de los temas más palpables. La inseguridad en las calles y en el transporte público son los aspectos más sensibles al ser los espacios en los cuales más se exponen los ciudadanos.

Apreciamos que los jóvenes entre 15 y 25 años son las principales víctimas de esta violencia que golpea al país. Ahora bien, estas cifras hay que mirarlas

igualmente bajo la óptica de la cantidad de víctimas fatales que produce la lucha entre las pandillas mencionadas. Esta guerra entre maras ayuda a elevar los índices de mortalidad en la población joven. Es importante señalar que este margen de la población juvenil estructura un importante número de miembros de dichas pandillas.

El Salvador es, dentro de los países latinoamericanos, el que ostenta la mayor tasa de homicidios en los jóvenes entre 15 y 25 años. Esta situación se explica por varios factores, entre ellos, las secuelas de la guerra, los desequilibrios económicos desarrollados por el esquema neoliberal puesto en marcha a principios de los noventa, el crecimiento del fenómeno de las pandillas y un factor bastante representativo como lo es el desorden de la base familiar de muchos de los miembros de las pandillas. Los estudios del PNUD demuestran igualmente que muchos de los jóvenes padecen de una especie de desorden de hogar en el sentido de que las estructuras familiares son complejas. El caso de niños huérfanos y abandonados no es nada despreciable. También se ve constantemente el caso de familias monoparentales. La inmigración de padres a los Estados Unidos, la delincuencia y la violencia privan a los jóvenes de sus padres desde edades muy tempranas. Es por ello que el fenómeno de las pandillas ha tenido tan buena recepción de los jóvenes, dado que estas agrupaciones juveniles se han convertido en una suerte de hogar o de una cofradía para estos huérfanos o jóvenes abandonados en medio de las complejas circunstancias del contexto salvadoreño. Al respecto concluye Peñaranda:

Las causas generales [de la criminalidad] suelen asociarse a los desequilibrios sociales y las secuelas de la guerra. El mismo informe [del Banco Mundial] también señala la extendida propagación de las armas de fuego, los bajos ingresos, la pobreza, el bajo nivel educativo y la falta de oportunidades de empleo, como elementos que contribuyen al comportamiento de la criminalidad. (Gutiérrez & Peñaranda, 2009, p. 256)

Más allá del problema de la criminalidad tenemos una de las fases posteriores a esta que es el castigo o reclusión. Una de las deudas pendientes de los acuerdos de paz de 1992 es el tema de justicia. El sistema judicial salvadoreño es bastante deficiente y muy politizado lo cual lo convierte en uno de los palos en la rueda en el sistema institucional. Cuando las condenas llegan, nos encontramos frente a un sistema atestado de centros penitenciarios, colapsados por el desborde de la capacidad de recepción de prisioneros. Además de ello, el grueso de la población carcelaria pertenece o ha pertenecido a las

maras. De tal suerte, al interior de las cárceles se reproducen las lógicas de violencia y enfrentamiento entre pandillas. Así, tanto la Salvatrucha como la Barrio 18 convierten las cárceles en otro espacio de disputa. Los pandilleros son separados de acuerdo a la mara que pertenezcan, y una vez allí se convierten en amos y señores de estos espacios de reclusión (Ward, 2013). Se evidencia de esta manera la incapacidad del Estado para lograr controlar esta situación que, desde luego, también se encuentra mediada por la corrupción del orden estatal.

Seguridad privada y uso privativo de armas en El Salvador

Por último, consideramos necesario hacer mención de un aspecto representativo dentro del marco y el esquema de seguridad, tanto en El Salvador como en el resto de América Latina, a saber: la seguridad privada. Este fenómeno se ha vuelto muy común en la región centroamericana, pero no es exclusivo de ella. La seguridad privada ha crecido de forma significativa. Podemos afirmar que Panamá es uno de los países con mayor número de hombres al servicio de la seguridad privada por cada 100 000 habitantes (ONU, 2012). Muy de cerca, se ubican Honduras, Guatemala y Brasil al tener igualmente altas tasas en materias de seguridad privada. Si bien El Salvador se ubica detrás de países como Colombia y Chile a este respecto, no escapa a la lógica del aumento de cuerpos de seguridad privada. Para el caso específico de El Salvador, llama la atención el tema de la seguridad privada en áreas rurales que se convierte en muestra clara de cómo se ha venido desarrollando un esquema de seguridad en aras de protección de los intereses particulares. Más allá de todo esto, lo que resulta preocupante es el uso y control de las armas ya que las compañías de seguridad tienen la capacidad y autorización del Estado para su manejo. Así, la población civil se puede hallar vulnerable ante posibles excesos en el uso de la fuerza, máxime cuando El Salvador tiene complejos antecedentes de escuadrones de la muerte, grupos paramilitares y presencia de la antigua Policía Rural. En palabras de Peñaranda tenemos que:

Se sabe que en manos de las empresas privadas de seguridad hay más de nueve mil armas de fuego y que cuentan con más de 20 mil efectivos cada uno de ellos al menos dotado de un arma. Aunque no hay un registro detallado del perfil de los vigilantes privados se sabe que los empresarios de la seguridad privada prefieren contratar a exmilitares o exguerrilleros para ahorrar en costos de adiestramiento. (Gutiérrez & Peñaranda, 2009, p. 258)

No desconocemos la posibilidad de que estas compañías operen, pero si se hace necesario advertir que un uso descontrolado de las armas y un aumento sensible de las compañías de seguridad privada se pueda convertir en una clara y directa amenaza a la población civil que conoce en demasía los horrores de la ausencia del monopolio de la violencia por parte del Estado.

Los otros rostros de la violencia en El Salvador

Sin duda alguna, cuando tratamos de hablar de los diversos tipos de violencia, encontramos cómo la violencia física, la que más hemos intentado evidenciar aquí, está completamente concatenada con la violencia estructural, y cómo ello da paso a una violencia de orden simbólico. La sociedad salvadoreña de la posguerra asumió el proceso de paz de 1992 con una elevada dosis de optimismo. Sin embargo, lo que podemos apreciar es que la guerra misma “aplazó” problemas relevantes de la sociedad. Una vez fuera el escenario de guerra, dichos problemas que habían quedado relegados vuelven a emerger y se localizan casi que como prioridades. En el orden social, podemos decir que el problema de la tierra y su distribución vuelven a ser un tema sensible. Pero más allá de eso, lo destacable de los primeros meses de la posguerra será la vinculación sistemática de un modelo neoliberal en el país.

El presidente Cristiani había dedicado todo su esfuerzo político para lograr el proceso exitoso de paz con la guerrilla. Sería su sucesor, Armando Calderón Sol (1994-1999), miembro del mismo partido, ARENA, quien tendría la vía libre apoyado en una asamblea legislativa ampliamente mayoritaria (Artiga, 2015) y pondría en marcha todo un aparato de medidas de reajuste económico. Hemos de señalar con insistencia la ley 471 de 1995 que reúne una parte importante de las dinámicas señaladas. A través de esta ley, se elevó el impuesto a las ventas, se eliminaron los aranceles que le abrían claro paso a la llegada de mercancías del extranjero, pero, sobre todo, se permitió el despido de cerca de quince mil trabajadores del sector público (Almeida, 2011). Los sectores que más resintieron estos despidos masivos fueron: telecomunicaciones, electricidad, obras públicas y pensiones, entre otros. Esta situación coincide justamente con un préstamo que el presidente Calderón había solicitado muy poco tiempo después de haberse posesionado en sus funciones en el año de 1994. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) le otorgó un préstamo por mil millones de dólares para poner en marcha

lo que el presidente denominaba su programa de modernización nacional, especialmente en lo que a infraestructura refiere:

Es necesario resaltar algo muy curioso dentro de lo que pudimos apreciar en aquellos años que el estoy comentando. La aprobación de leyes como la 471, muy famosa en este país, era muy fácil de ser aprobada pues el presidente tenía la mayoría en la Asamblea. Pero más allá de eso, los debates y las aprobaciones de las leyes solían ocurrir o muy tarde en la noche o muy temprano en la madrugada, cuando la mayoría de gente descansaba, ¿entendés? A pesar de todo este tipo de acciones encubrían un proyecto perverso para el país con consecuencias nefastas. (Entrevista con Héctor Dada, 2016)

Sin duda alguna, la puesta en marcha de este tipo de iniciativas generó indignación entre la población salvadoreña que salió a las calles a denunciar estas acciones. No obstante, se evidenció una clara ausencia de articulación entre los movimientos, en especial los sindicatos, que reivindicaron de forma individual sus derechos y sus demandas. A ellos se sumaría tímidamente el ahora partido político FMLN. Pero sus voces seguían siendo minoritarias en un país controlado por amplios sectores de las elites económicas y políticas.

Ta vez el único sector que lograría resistir un poco más de tiempo sería el de la salud. Las famosas marchas blancas (alusivas a médicos y enfermeras) se hicieron célebres a finales del siglo xx. No obstante, para 2001, habían sido derrotadas y se había consumado la privatización del sector salud. Esta derrota de los sectores sociales se ve acompañada de la dolarización de la economía. El 1 de enero de 2001, bajo la presidencia de Francisco Flores (1999-2004), desapareció el colón, moneda tradicional salvadoreña abriéndole paso al dólar, perdiendo de esta manera autonomía fiscal por parte de El Salvador, y dependiendo directamente de la reserva Federal de los Estados Unidos (FED).

La década de los años 2000 estará entonces marcada por una profunda crisis económica permanente. El Estado salvadoreño comenzó a generar cada vez más deuda para sostenerse fiscalmente. Gran parte de esta deuda ha sido utilizada para sostener el gasto burocrático del Estado. La sociedad se ha polarizado como consecuencia de esta dinámica económica.

Dentro del escenario salvadoreño, se evidencia un amplio ejercicio de exclusión social, marcado en la configuración de sus ciudades, de sus discursos

cotidianos y en general de los ejercicios de interacción social¹⁷. La sociedad salvadoreña está marcada por la exclusión que se puede denotar incluso en las modas de consumo y en los patrones de diferenciación social evidenciados a través de esta situación. Las denominaciones peyorativas de sectores de fuertes ingresos hacia los sectores populares se pueden evidenciar con relativa facilidad, y allí se puede ver, como en otros tantos escenarios, el desarrollo de un marco de violencia simbólica que acompaña.

El fenómeno de violencia y criminalidad señalado anteriormente no es exclusivo de la problemática hasta aquí analizada. Esto sugiere que el fenómeno de las pandillas está también directamente ligado no solo a un ejercicio sistemático de exclusión social, sino anclado a profundos problemas de orden económico que cierran los espacios laborales y de oportunidades para los cientos de jóvenes pertenecientes a las pandillas. La crisis fiscal en la que está envuelto el país ha limitado el uso de los recursos al funcionamiento de la máquina burocrática y la protección del patrimonio de unas reducidas élites. Ello ha privado la inversión pública a importantes sectores como la salud y la educación, prioritarios para El Salvador contemporáneo.

Hemos señalado insistentemente que el marco de la violencia estructural sigue casi intacto en El Salvador. Los diálogos de paz no afectaron casi en nada esta dinámica. Peor aún, la llegada del FMLN al poder en 2009 se vio como una fuente de esperanza de cambio y renovación para el país, sin embargo, la frustración ha sido considerable. Lo que se encuentra en El Salvador de hoy, es que el FMLN, antiguo actor y protagonista de la violencia física, se ha convertido en un reproductor de la violencia simbólica. Esto como consecuencia de la continuación de las políticas de orden neoliberal del partido ARENA, además de la consolidación por parte de los miembros de este partido, de una nueva élite económica. A la sombra del FMLN se ha construido una nueva élite empresarial que se ha apoderado de importantes rentas del Estado para beneficio particular (Entrevista con Marvin Galeas, San Salvador, 7 de junio de 2016)¹⁸.

17 Vale la pena traer a colación un simple ejemplo de ello. En El Salvador, por ejemplo, la expresión “tirar tortilla” denota un ejercicio destinado a las personas más pobres. Se trata de vender pupusas (arepas) en la calle. Estas arepas gozan de amplia popularidad dentro de la dieta salvadoreña. Sin embargo, el oficio de venderlas denota cierto rango social y puede llegar a verse como una suerte de oficio “de baja clase”, dados los reducidos márgenes de ganancia que ello procura.

18 Exguerrillero del FMLN. Miembro del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y exdirector de Radio Venceremos. Periodista y empresario editorial.

Hasta aquí no hemos hecho más que mencionar los aspectos más relevantes y evidentes de la violencia especialmente directa y física, dejando por fuera –por razones de espacio– otro tanto de violencias que se pueden rastrear en la sociedad salvadoreña. Aquí hacemos referencia a la violencia intrafamiliar, en un país aún muy marcado por el machismo. Así mismo, la violencia hacia los menores de edad por parte bien sea de los padres cuando están presentes o de quien haga sus funciones. La violencia cotidiana de las calles entre las personas del común igualmente podría añadirse a esta lista.

Experiencias y lecciones para la Colombia del posacuerdo

Desde noviembre de 2012, momento en el cual el país comenzó a recorrer una vez más el sendero de las negociaciones de paz entre el Gobierno y las FARC, se comenzó igualmente a despertar la ilusión de que este proceso fuera, en efecto, definitivo, y evitar así el doloroso despertar de la frustración como había sucedido en varias ocasiones¹⁹. Colombia cuenta con la fortaleza de tener tras de sí un número significativo de procesos de paz y escenarios de posconflicto que se convierten en experiencias y lecciones aprendidas. El Salvador se suma de esta forma a todas estas experiencias.

¿Qué puede aprender Colombia entonces de la experiencia salvadoreña? Es esta sin duda la pregunta más importante que vale la pena hacerse después de haber analizado los antecedentes propuestos por el país centroamericano. Y de allí, se debe desprender una aclaración y advertencia muy importante: todos los procesos de paz, así como los escenarios de posacuerdo siempre serán diferentes. Hecha esta aclaración, lo más importante para decir es que lo fundamental es, en la línea de Galtung, romper el cerco de la violencia estructural. Esto sugiere que el silencio de los fusiles no puede ni debe ser el único eje que se articule luego del proceso de paz. Preguntarse por qué se llegó a la guerra resulta fundamental para atacar esas causas de manera efectiva. Así, tenemos que la paz es un duro, complejo y prolongado proceso social en el cual todos los individuos se encuentran comprometidos.

Podríamos decir que uno de los grandes errores salvadoreños es el de haber considerado que con la firma de la paz se habían resuelto los problemas de la

19 Prácticamente, desde la presidencia de Belisario Betancur (1982-1986), las FARC han llevado acercamientos y diálogos de paz con todas las administraciones. Las frustraciones han estado a la orden del día por diversos contextos y razones (ver Chernick, 2012 y Pizarro, 2017).

sociedad. En especial, haber bajado la guardia en la era del posconflicto desde una perspectiva económica resultó letal para la consolidación de una sociedad más pacífica. En un contexto de exclusión social y falta de oportunidades, prosperó el fenómeno de la violencia criminal que copó de forma acelerada espacios abiertos por el teatro de la guerra, y en los cuales ni el Estado ni la sociedad estuvieron atentos a su desarrollo.

En ese orden de ideas, la sociedad colombiana deberá afrontar y sortear todos los obstáculos que se presentarán en el posacuerdo, y todo lo que refiere a la violencia estructural, directa y simbólica. Al igual que en El Salvador, en Colombia la totalidad de la violencia no reposa en el conflicto armado y la guerra contra las insurgencias. De hecho, solo una parte de las víctimas se desprende de allí. Tantos otros escenarios como el paramilitarismo, el narcotráfico, la minería ilegal, las pandillas urbanas cobran a su turno un número importante de víctimas. Luego de casi tres años de firmados los acuerdos, logramos percibir fenómenos tanto de aumento de la violencia como de incremento de las economías ilegales. Esto sin hablar de problemas de violencia intrafamiliar y violencia cotidiana de parte de los ciudadanos. Entonces, se hace necesario reflexionar y poner en práctica políticas integrales que busquen atacar realmente el desarrollo de las diversas violencias que se reproducen en el país. Esto, con el objetivo de evitar una mutación de la violencia y la reproducción de escenarios más complejos que los vividos durante la guerra. Las balas deben dejar de sonar, pero al lado de ello es la población en general que debe desarmarse en los más diversos sentidos.

Reproducir un escenario de violencia de pandillas como el salvadoreño en Colombia resultaría difícil de pensar: esta no es por el momento la situación colombiana. Sin embargo, el que no se reproduzca un fenómeno de pandillas no exime a Colombia de fenómenos y variantes particulares. Tanto las disidencias de las FARC como la presencia de la guerrilla del ELN, así como múltiples cuerpos paramilitares, nos hablan de un escenario altamente vulnerable a la reproducción de la violencia. La existencia y crecimiento de economías ilegales han sido y continúan siendo un elemento sumamente nocivo para la lucha contra dicha violencia. Tanto la paz parcelada como la continuidad de la ilegalidad son factores que no nos permiten pensar en verdaderos caminos de pacificación. Esto lanza una alerta significativa a través de la cual es importante abandonar la idea de que con las FARC por fuera del escenario militar, nos adentráramos en un verdadero proceso de paz. Sin duda, era necesario el desarme de esta guerrilla, pero al igual que en El Salvador, no se debe bajar la guardia y tomar esto como un punto de llegada.

Sobre Colombia puede, pues, también aplicar el estigma o el mito de la cultura de la violencia. En un país que vivió más de una decena de guerras civiles en el siglo XIX, que construyó sus bases políticas e institucionales al calor de las armas, y que en gran parte del siglo XX evidenció diferentes tipos de violencia, pensar en la cultura de la violencia puede ser igualmente una posibilidad. Sin embargo, como en El Salvador, en Colombia, difícilmente puede aplicar esta idea por las razones y argumentos ya expuestos. Y como en El Salvador, la posibilidad de una violencia cultural y estructural también puede llegar a ser posible. La forma de poder atacar esta suerte de violencia es justamente arremeter contra las causas de la violencia estructural, y no conformarse con acabar con la violencia directa que resulta ser siempre la forma más simple de atacar la violencia.

Colombia ha afrontado diversos ciclos de violencia, pero ello no la condena a la repetición constante. La violencia ha mutado, al igual que el país centroamericano y otros países de la región. Pensar y comprender que una violencia estructural existe es tal vez el primer paso para romper con esos ciclos de la violencia, y tal vez la mejor estrategia para evitar que la violencia pueda mutar abriendo un nuevo ciclo de victimización.

Conclusión

El cierre de un evidente círculo vicioso marca pues un entramado de violencias en El Salvador. Hemos apreciado cómo uno de los temas más visibles en el país ha sido la violencia física. No obstante, de forma subterránea hay una violencia estructural que se configuró a lo largo del siglo XX, y que sigue vigente en el siglo XXI. Los diálogos de paz de 1992 no aseguraron cambios del orden estructural que pudieran prometer un nuevo país. El Salvador del siglo XXI continúa reproduciendo las lógicas del entramado entre la violencia estructural, apalancado en un sistema excluyente, la violencia simbólica, evidenciada a través de una dominación de pequeños sectores de la élite que reproducen dicho modelo de exclusión, y lo defienden a través de diferentes espacios públicos y privados y, por último, una violencia física que se denota día a día en las calles. Una violencia que capta la atención de los medios y de la academia. Una violencia que se presenta solamente como la punta de un iceberg inmerso en una seria problemática de orden social en la cual, la sociedad, al igual que décadas atrás, ha sido y continúa siendo la principal víctima.

Para el caso de El Salvador, hallamos pues una suerte de mutación de la violencia que en algunos momentos no tiene una interconexión directa, pero en muchos otros es necesario ver en retrospectiva a fin de comprender los fenómenos contemporáneos. Es decir, se hace fundamental dar una mirada a diferentes procesos de violencia y conflicto en el país para poder comprender lo que hoy se vive. No podemos decir que la violencia delincencial sea consecuencia directa de la guerra civil de los años de 1980. Pero tampoco podemos verlos como fenómenos aislados. Encontramos varios aspectos al respecto. Por un lado, en las mesas de negociación del proceso de paz de comienzos de los años 90 no se abrió el espacio necesario para discutir aspectos sociales que se podrían considerar como estructurales en el conflicto armado. Se hizo un gran énfasis en lo político y militar, más no en lo social.

Por otra parte, luego de las negociaciones y ante la reiterada progresiva de las ayudas internacionales, el Estado salvadoreño falló de forma significativa al no redundar insistentemente en políticas públicas de largo aliento: temas de fondo como la reinserción y la reconciliación y la reconstrucción. En el posconflicto se creyó, tal vez con ingenuidad, que la paz sería una consecuencia directa de la firma de los acuerdos. No se tuvo en cuenta que la paz era un punto de partida y no un punto de llegada, y que construir la paz era un proceso tal vez más complejo que la idea de deshacer la guerra.

De tal forma, en términos de Galtung, se atacó la violencia directa y no la violencia estructural. Al dejar viva esta violencia estructural se abrió el espacio para que nuevos focos y formas de violencia emergieran abriendo así una página de desesperanza para la sociedad salvadoreña. La desilusión de la paz fue muy grande dado que no se transformó en cambios reales para el país. Si bien la idea de una nueva guerra civil está fuera del panorama salvadoreño, la inestabilidad y precariedad redundan en un ambiente de pesimismo que genera importantes reflexiones para el futuro y que al mismo tiempo genera importantes retos y desafíos para toda la nación.

De toda esta experiencia y camino recorrido por el país centroamericano, Colombia debe tomar atenta nota, así como de otras tantas experiencias internacionales. Todas estas experiencias deben construir un acervo suficientemente amplio como para diseñar estrategias propias y autóctonas que nos permitan el desarrollo de un proceso de posacuerdo exitoso. Errores y buenas prácticas hacen pues parte de un valioso cúmulo de experiencias vividas por otros países, entre los cuales El Salvador tiene aún importantes aportes por hacer, principalmente enfocándose en la idea de comprender las verdaderas estructuras de la violencia y partiendo del principio básico de que la paz no es la ausencia de la guerra.

Como en El Salvador, la explosión de la guerra se dio por causas profundas de una sociedad altamente excluyente y dominante por parte de sus elites. Negociar la paz, desarmar la guerrilla y ofrecerles un espacio político no fue realmente una solución de fondo para acabar con problemáticas de profunda antigüedad. Si el Estado, los Gobiernos y especialmente la sociedad colombiana no acatan esto de forma detallada, se podría estar ante la reproducción de fenómenos de violencia, no necesariamente política, pero sí de otros órdenes. Colombia, al igual que El Salvador, y por los argumentos aquí desarrollados, no podría entrar en una cultura de la violencia, pero sí podría desarrollar, tal vez sin quererlo, una violencia cultural.

Referencias

- Almeida, P. (2011). *Olas de movilización popular: movimientos sociales en El Salvador, 1925-2010*. San Salvador: UCA Editores.
- Allison, M. (2010). The legacy of violence on post-civil war elections: The case of El Salvador. *Studies in Comparative International Development*, 45, 104-124.
- Artiga, A. (2015). *Gobernabilidad y democracia en El Salvador*. San Salvador: UCA Editores.
- Bourdieu REDCOL. (20 de agosto de 2012). *La violencia simbólica* (Traducción de la entrevista de 1994) [Archivo de blog]. Recuperado de <http://bourdieuredcol.blogspot.com.co/2012/08/la-violencia-simbolica-traduccion.html>
- Brenneman, R. (2013). *Homies and hermanos: God ad gangs in Central America*. Oxford: Oxford University Press.
- Bruneau, T., Dammert, L., & Skinner, E. (Eds.). (2011). *Maras: Gang violence and security in Central America*. Austin: University of Texas Press.
- Cardenal, R., & González, L. A. (Eds.). (2007). *El Salvador: la transición y sus problemas*. San Salvador: UCA Editores.
- Cerbino, M. (Coord.). (2011). *Más allá de las pandillas: violencias, juventudes y resistencias en el mundo globalizado*. Quito: Flacso, Sede Ecuador/Ministerio de Inclusión Económica y Social.
- Chernick, M. (2012). *Un acuerdo posible: solución negociada al conflicto armado colombiano*. Bogotá: Aurora Editores.

- Córdova, R. (1999). *El Salvador: reforma militar y relaciones cívico-militares*. San Salvador: Editorial FundaUngo.
- Galtung, J. (1998). *Tras la violencia 3R: reconstrucción, reconciliación, resolución. Afrontando los efectos visibles e invisibles de la guerra y la violencia*. Bilbao: Gernika Gogoratuz/Gobierno Vasco.
- Garibay, D. (2003). *Des armes aux urnes: processus de paix et réinsertion politique des anciennes guérillas en Colombie et au Salvador* (Tesis doctoral inédita). Institut d'Études Politiques de Paris. Recuperado de <https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00241152/document>
- Geertz, C. (2000). *La interpretación de las culturas*. Madrid: Gedisa.
- Gutiérrez, F., & Peñaranda, R. (Eds.). (2009). *Mercados y armas: conflictos armados y paz en el periodo neoliberal: América Latina, una evaluación*. Medellín: La Carreta Política.
- Human Rights Watch. (2019). *El Salvador. Eventos de 2018* (Informe Mundial 2019). Recuperado de <https://www.hrw.org/es/world-report/2019/country-chapters/326038>
- Krujtit, D. (2008). *Guerrillas: War and peace in Central America*. Londres: Zed Books.
- Martínez, O. (2011). *El Salvador: las negociaciones de los acuerdos de paz 1990-1992*. San Salvador: Editorial Nuevo Enfoque.
- Mayorga, R., Sánchez, C. S., Nikken, P., Ter, H. E., Antonini, B., Escobar, G. D., & Soto, A. (2014). *El Salvador: de la guerra civil a la paz negociada*. San Salvador: Secretaria de Cultura de la Presidencia de El Salvador, Dirección de Publicaciones e Impresos.
- Moreno, J. D. (2017). Paz, memoria y verdad en El Salvador: experiencias y lecciones para la Colombia del posacuerdo. *Revista Análisis Político*, 30(175), 175-193.
- Moreno, J. D. (2018a). Entre la guerra y la política. Una mirada comparativa de los procesos de paz en América Latina: los casos del FMLN y el M-19, 1986-1992. *Revista de Historia*, 77, 11-42.
- Moreno, J. D. (2018b). Crónicas de la guerra y de la paz: resistencias y desafíos en la negociación salvadoreña (1980-1992). *Revista Estudios de Derecho*, 75(165), 105-130.

- Motlagh, J. (marzo, 2019). Inside El Salvador's battle with violence, poverty and US policy. *National Geographic Magazine*. Recuperado de <https://www.nationalgeographic.com/magazine/2019/03/el-salvador-violence-poverty-united-states-policy-migrants/>
- Museo de la Palabra y la Imagen. (2012). Historias de migración. *Trasmallo*, 7. Recuperado de <http://museo.com.sv/2012/05/mupi-publica-historias-de-migracion/>
- Nasi, C. (2007). *Cuando callan los fusiles: impacto de la paz negociada en Colombia y Centroamérica*. Bogotá: Norma.
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (2013). *Seguridad ciudadana con rostro humano: diagnóstico y propuestas para América Latina* (Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014). Nueva York: Autor. Recuperado de <https://www.undp.org/content/dam/rblac/img/IDH/IDH-AL%20Informe%20completo.pdf>
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (2014). *Sostener el progreso humano: reducir vulnerabilidades y construir resiliencia* (Informe Regional de Desarrollo Humano 2014). Nueva York: Autor. Recuperado de <http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr14-summary-es.pdf>
- Rouquié, A. (1994). *Guerras y paz en América Central*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Samayoa, S. (2002). *El Salvador: la reforma pactada*. San Salvador: UCA Editores.
- Wacquant, L. (2004). An anthropology of structural violence by Paul Farmer [Comment]. *Current Anthropology*, 45(3), 322. <https://doi.org/10.1086/382250>
- Ward, T. W. (2013). *Gangsters without borders: An ethnography of a Salvadoran street gang*. Oxford: Oxford University Press.
- White, A. (2001). *El Salvador*. San Salvador: UCA Editores.
- Wickham-Crowley, T. (1993). *Guerrillas and revolution in Latin America: A comparative study of insurgents and regimes since 1956*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Zartman, W. (1993). The unfinished agenda. Negotiating internal conflicts. En R. Licklider (Ed.), *Stopping the killing: How civil wars end* (pp. 20-34). Nueva York: New York University Press.

Otras fuentes bibliográficas

- Albiac, M. D. (2007). Los ricos más ricos de El Salvador. En R. Cardenal & L. A. González (Eds.), *El Salvador: la transición y sus problemas* (pp. 153-183). San Salvador: UCA Editores.
- Arnson, C. (1999). *Comparative peace processes in Latin America*. Washington, DC: Stanford University Press.
- Baloyra, E. (1982). *El Salvador in transition*. Chapel Hill: North Carolina University Press.
- Bulmer, T. (1998). *Historia económica de América Latina*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Castro, M. (1983). *Función política del ejército salvadoreño en el presente siglo*. San Salvador: Universidad Centro Americana.
- Cerdas Cruz, R. (1998). Desmovilización y fuerzas del orden en Centroamérica. *Foro Internacional*, 38(1), 59-90.
- Cockcroft, J. (2001). *América Latina y Estados Unidos: historia y política país por país*. México: Siglo XXI.
- Collins, C. (2008). State terror and the law: The (Re) judicialization of human rights accountability in Chile and El Salvador. *Latin American Perspectives*, 35(5), 20-37.
- Córdova, R., & Benítez, R. (1989). *La paz centroamericana: expediente de documentos fundamentales*. México: MUNAM.
- Dodson, J. M., Jackson, D. W., & L. Nuzzi O'shaughnessy. (1999). Protecting human rights: The legitimacy of judicial system reforms in El Salvador. *Bulletin of Latin American Research*, 18(4), 403-421.
- Equipo Maíz. (2014). *Historia de El Salvador*. San Salvador: UCA Editores.
- Fals Borda, O. (1975). *Historia de la cuestión agraria en Colombia*. Bogotá: CINEP.
- Galtung, J. (1969). Violence, peace, and peace research. *Journal of Peace Research*, 6(3), 167-191.
- Galtung, J. (1989). *Violencia cultural* (Documento n.º 14). Vizcaya, País Vasco: Gernika Gogoratuz.

- Galtung, J. (1990). Cultural violence. *Journal of Peace Research*, 27(3), 291-305.
- García, M. (1992). *De La Uribe a Tlaxcala: procesos de paz*. Bogotá: CINEP.
- Gordon, S. (1989). *Crisis políticas y guerra en El Salvador*. México: Siglo XXI.
- Grenier, Y. (1994). *Guerres et pouvoir au Salvador*. Laval : Les presses de l'Université de Laval.
- Krauss, C. (1991). *Inside Central America. Its people, politics and history*. Nueva York: Summit Books.
- Lafeber, W. (1983). *Inevitable revolutions: The United States in Central America*. Nueva York: Norton.
- Lafeber, W. (1984). The Reagan administration and revolutions in Central America. *Political Science Quarterly*, 99(1), 1-25.
- Licklider, R. (1993). *Stopping the killing: how civil wars end*. Nueva York: University Press.
- MacNeil, F. (1988). *War and peace in Central America. Reality and illusion*. Nueva York: Charles Scribner's Sons.
- Martínez, O. (1998). *El Salvador: la asamblea legislativa*. San Salvador: Nuevo Enfoque.
- Martínez, O. (2007). *El Salvador: los acuerdos de paz y el informe de la Comisión de la Verdad*. San Salvador: Editorial Nuevo Enfoque.
- Montobbio, M. (1999). *La metamorfosis de pulgarcito: transición política y proceso de paz en El Salvador*. Barcelona: Icaria Editorial.
- Morales, A. (1995). *Oficios de paz y posguerra en Centroamérica*. San José de Costa Rica: FLACSO.
- Pardo, R. (1996). *De primera mano Colombia 1986-1994: entre conflictos y esperanzas*. Bogotá: Cerec.
- Ortiz, R. (2000). La "salvadorización" de Colombia: riesgos de desintegración nacional. *Política Exterior*, 14(75), 37-43.
- Pizarro, E. (2017). *Cambiar el futuro: historia de los procesos de paz en Colombia*. Bogotá: Debate Editores.
- Ramírez, S., & Restrepo, L. (1988). *Actores en conflicto por la paz: el proceso de paz durante el Gobierno Betancur, 1982-1986*. Bogotá: Siglo XXI.

- Roett, R., & Smith, F. (1988). *Dialogue and the armed conflict: Negotiating the civil war in El Salvador*. Washington, D C: Jhons Hopkins University.
- Touraine, A. (1988). *La parole et le sang: politique et société en Amérique Latine*. París: Éditions Odile Jacob.
- Venturini, E. (1986). *Amérique Centrale : la cinquième frontière?* París: La Découverte.
- Rovira, J. (1996). La consolidación de la democracia en América Central: problemas y perspectivas en El Salvador, Guatemala y Nicaragua (1990-1996). *Anuario de Estudios Centroamericanos*, 22(2), 7-38.
- Wehr, P., & Lederach, J. P. (1991). Mediating conflict in Central America. *Journal of Peace Research*, 28(1), 85-98.



Este libro se terminó de editar en
la Editorial UTADEO en el mes
octubre de 2020

EXPERIENCIAS DE PAZ Y TRANSICIÓN

Este libro pretende indagar y proyectar algunos de los retos a que se podrá enfrentar Colombia en la presente etapa de posacuerdo, con base en el análisis de otras experiencias de posacuerdo o transición política en Colombia y en el mundo. A partir de diversos casos de estudio, como El Salvador, Guatemala, Perú y Argentina, se propone establecer elementos de comparación con el actual caso colombiano, identificar y anticipar obstáculos, dilemas y riesgos, así como aportar recomendaciones que puedan servir de referencia al presente escenario.

El texto reúne seis capítulos que se concentran en algunas dimensiones específicas de los contextos de posacuerdo, como la verdad, la reconciliación, la transfiguración de la violencia, el desarme, desmovilización y reinserción (DDR), la Justicia transicional, el rol de los medios y de la comunidad internacional.

El libro es el producto de la segunda fase del proyecto de investigación “Experiencias de paz: lecciones aprendidas para Colombia”, desarrollado por el Observatorio de Construcción de Paz de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, cuyo principal propósito fue identificar enseñanzas para el momento político que vive Colombia, con base en una metodología comparativa. Se buscó indagar cómo Colombia podrá aprender de países que han vivido procesos análogos de transición de la guerra a la paz, tanto en términos de elementos positivos, potencialmente aplicables en el caso colombiano, como de errores a evitar. Por otro lado, pretendió analizar los acuerdos de paz anteriormente firmados con grupos guerrilleros y paramilitares colombianos, con el ánimo de contrastar los retos políticos, jurídicos y sociales que se vivieron en esos momentos con el presente escenario, así como identificar las lecciones aprendidas de dichos procesos.